

# AMÉRICA LATINA Y LA NECESIDAD DE FUNDAMENTACIÓN DESDE BASES JURÍDICAS DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL.

Lic. Carlos Justo Bruzón Viltres\*

**Resumen:** El propósito fundamental del siguiente artículo es analizar algunos aspectos relacionados con el proceso de integración regional en América Latina y la necesidad de crear las bases jurídicas para la formación de un esquema que posibilite la plena unidad continental, sustentada en el Derecho. Algunos elementos, como la subregionalización o fragmentación de estos procesos y su proyección esencialmente económica, así como otros obstáculos, impiden alcanzar una adecuada *fundamentación desde bases jurídicas de la integración latinoamericana*, definiendo aquí el alcance e importancia de esta categoría, y su posible realización a través de la configuración de algunos modelos, como el confederal, al menos transitoriamente, en nuevos esquemas como el ALBA, para abrir paso a una integración superior.

**Abstract:** The main purpose of the following paper is to analyze some aspects related with the regional integration process in Latin America, and the need to create the legal basis for the formation of a scheme that to render possible the whole continental union, supported in the Law. Some elements, like a great number of the sub-regional cooperation schemes and the essentially economical projection of them, and other obstacles, make impossible to reach a fit *foundation of the Latin America integration from legal basis*. It will be explained here the importance of this category, and its possible application to transitory models (the confederal, for instance) in a new mechanisms of integration, like the ALBA, to make way for a superior integration.

**Palabras claves:** Integración regional, América Latina, modelos confederales, fundamentación jurídica de la integración regional, ALBA.

**Key words:** Regional integration, Latin America, confederal models, legal basis of the regional integration, ALBA.

**SUMARIO:** 1. Palabras preliminares. 2. Los principales procesos integracionistas en América Latina: potencialidades y limitaciones en el camino hacia un modelo que garantice la plena integración continental. 2.1. *La Alternativa Bolivariana para las Américas*. 3. El debate en torno a las fórmulas para la integración y su incorporación en el proceso integracionista continental. 4. La *fundamentación desde bases jurídicas del proceso de integración regional*. 4.1 *La perspectiva confederal en el contexto de la integración latinoamericana*. 5. A modo de conclusión.

## 1. Palabras preliminares

La idea de abordar el tema de la integración regional en América Latina va convirtiéndose cada vez más en un difícil reto. La multiplicidad de enfoques con que se analiza el fenómeno integracionista en nuestro subcontinente y las propias disyuntivas a las que se enfrenta por momentos ha conllevado a un crecimiento sustancial de estudios teóricos, lo que en ocasiones se revierte en una suerte de campo minado, en el que es peligroso

---

\* Profesor de Teoría General del Estado y Derecho Internacional Público, Departamento de Derecho, Universidad de Granma, Cuba.

adentrarse, pero donde no caben dudas que siempre quedan aristas del problema sin explorar o por lo menos insuficientemente tratadas, o donde emerge la necesidad de introducir el debate y la discusión con la intención de arrojar más luces sobre el entramado de realidades que afectan el desarrollo de la integración en nuestra área geográfica.

Con avances momentáneos en un proyecto u otro, América Latina se encuentra en circunstancias donde ciertos pasos en el ámbito de la integración pueden determinar la suerte de nuestros países, no superándose aún las dificultades que han contribuido al saldo negativo de la fragmentación real de los procesos integracionistas regionales<sup>1</sup> y la inacabada fundamentación jurídica de varias de sus propuestas. Formaciones de nuevos bloques y alternativas no faltan, algo que da vitalidad a este proceso en el continente, pero la aspiración máxima de aglutinar en torno a un gran proyecto continental a los Estados latinoamericanos e incluso caribeños, no parece por el momento consolidarse. Por otra parte, a la par que la teoría económica o la perspectiva social crecen como puntales en la conformación de sólidos mecanismos integracionistas, se mantiene la deuda que para con el Derecho y sus instituciones ha contraído la integración latinoamericana.

En este contexto este breve artículo pretende analizar algunos de los puntos de alguna manera relevantes en la comprensión de la dinámica de la integración continental, esencialmente relacionados con la necesaria fundamentación desde bases jurídicas de este proceso, tratando para ello de mantener una perspectiva crítica, aunque solo se trate de acercamientos a cuestiones elementales ligadas al papel del Derecho, y de manera particular el Derecho Internacional Público, en la construcción de una sólida estrategia integracionista que supere definitivamente los ribetes de subregionalización que caracterizan lo hecho hasta hoy en esta área. Paralelamente se realiza una valoración preliminar de las potencialidades de proyectos como la Alternativa Bolivariana para las Américas, en la aspiración de proveer un modelo a seguir, al menos transitoriamente, para consolidar aspectos estratégicos en la integración, capaces de encontrar en las instituciones jurídicas el sustento necesario, más allá de la teorización en el ámbito económico, mercantil o financiero, que por cuestiones de rigor tienden a imponerse en los debates sobre los derroteros de la integración continental.

La pretensión de aludir a estas temáticas intentando ciertas posiciones críticas me parece necesaria. Pero más necesaria aún considero debe ser la flexibilidad y la apertura que deben imponerse en los sectores tanto políticos como doctrinales, para escuchar y valorar proposiciones, que nunca serán suficientes mientras no se alcance lo que no equivale ya a

---

<sup>1</sup> En concordancia con la apreciación del profesor DÍAZ BARRADO, en el sentido de reconocer que “una de las características más significativas de la integración tal y como acontece en la actualidad, en el continente americano, es la pluralidad y diversidad de los procesos de integración existentes”, lo que condiciona, sin dudas, “una realidad compleja de integración”; DÍAZ BARRADO, C. M.: “La Comunidad Suramericana de Naciones: Propuestas y Realizaciones”, en Revista Española de Derecho Internacional, Vol. LVII-2005, No. 2, julio-diciembre, Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales-Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2006, p. 641. Otros tópicos relacionados con este fenómeno bajo el prisma del “nuevo regionalismo” pueden encontrarse en SANAHOJA, J. A.: “Regionalismo e integración en América Latina: balance y perspectivas”, en Revista Pensamiento Iberoamericano (disponible en INTERNET). Otras cuestiones relativas Algunas notas relativas al análisis del fenómeno de la subregionalización en el proceso integracionista de América Latina pueden confrontarse también en FERRERO COSTA, E.: “La integración en América Latina: situación actual y perspectivas”, en MOLS/HENGSTENBERG/ KOHUT/ LAUTH/ SANDNER/ SANGMEISTERS (Editores): Cambio de paradigmas en América Latina: nuevos impulsos, nuevos temores, ADLAF, Fundación Friedrich Ebert, Editorial Nueva Sociedad, Caracas, 1994, pp. 131-139.

un sueño o una aspiración históricamente fundada, sino un imperativo: la formación de una verdadera integración continental.

## **2. Los principales procesos integracionistas en América Latina: potencialidades y limitaciones en el camino hacia un modelo que garantice la plena integración continental.**

En América Latina se desarrollaron experiencias que fueron pioneras en la integración, anteriores incluso a la formación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, por ejemplo. Pero a diferencia de Europa, en nuestro continente “ninguno de estos precedentes llega a concretarse en definitiva, por inmadurez de condiciones históricas e interferencias externas, y por fundarse solo en afinidades culturales, coincidencias políticas o urgencias económicas de carácter coyuntural”<sup>2</sup>. Posteriormente se definen los primeros pasos en el proceso integracionista continental, sobre todo en la década de 1960, ampliándose los mecanismos de cooperación y coordinación del área latinoamericana en los años setenta y particularmente en los noventa.

En este escenario surge el Mercado Común Centroamericano (MCCA)<sup>3</sup>, que entra en vigor a partir del Tratado General de Integración Económica Centroamericana, suscrito en Managua, el 13 de diciembre de 1960 y que se ha ampliado a través de la firma de varios acuerdos y protocolos como parte de la configuración del Sistema de Integración Centroamericano; la Comunidad del Caribe (CARICOM)<sup>4</sup>, a partir del Tratado de Chaguaramas de 4 de julio de 1973; la Comunidad Andina de Naciones (CAN)<sup>5</sup>, que tenía como precedente el Grupo Andino creado mediante el Acuerdo de Cartagena de 1969, modificado por el Protocolo adoptado en el seno de la VIII Reunión del Consejo Presidencial Andino, que sesionó en Trujillo en el año 1996; el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN)<sup>6</sup>, adoptado en 1994; el Mercado Común del Sur

---

<sup>2</sup> KAPLAN, M.: Democratización, desarrollo nacional e integración regional de América Latina, Biblioteca Jurídica Virtual de la UNAM, IIJ-UNAM, México, D. F., 2008, p. 32.

<sup>3</sup> Uno de los antecedentes inmediatos a la formación de este Mercado Común fue la firma de Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA). El Protocolo de Tegucigalpa de 1991 sirvió para revitalizar los esfuerzos integracionistas, tratando de fortalecer la subregión centroamericana como una “zona de paz, democracia y desarrollo”. En este contexto se crea el Sistema de Integración Centroamericano (SICA), al que se une Panamá, queda abierto a la adhesión de Belice y se incorpora como miembro asociado República Dominicana en 2003 (Fuente consultada: [http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado\\_Com%C3%BA Centroamericano](http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_Com%C3%BA Centroamericano)).

<sup>4</sup> La Comunidad del Caribe (CARICOM) se constituyó con tres objetivos fundamentales: estimular la cooperación económica en el seno de un mercado común del Caribe; estrechar las relaciones políticas y económicas entre los Estados miembros y promover la cooperación educacional, cultural e industrial entre los países de la CARICOM. (Fuente: <http://www.americaeconomica.com/zonas/caricom.htm>).

<sup>5</sup> La Comunidad Andina de Naciones (CAN) tiene como objetivo común alcanzar un desarrollo integral, más equilibrado y autónomo. El proceso andino de integración se inició con la suscripción del Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969. Fueron miembros también Chile, en el período de 1969-1976 (aunque ostenta ahora la condición de miembro asociado, junto a otro grupo de Estados sudamericanos), y Venezuela, que decidió retirarse de este bloque en 2006. Antes de 1996 se conocía como Grupo o Pacto Andino. El Artículo 48 del Acuerdo de Cartagena define a la Comunidad Andina como una organización subregional con personalidad jurídica internacional. Como parte de la organización de este esquema se crea el denominado Sistema Andino de Integración (SAI; Protocolo de Trujillo de 1996, modificativo del Acuerdo de Cartagena). (Cfr., [http://www.es.wikipedia.org/wiki/Comunidad\\_Andina](http://www.es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Andina)).

<sup>6</sup> El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, TLC o NAFTA) es un bloque comercial entre Canadá, Estados Unidos y México que establece una zona de libre comercio. Entró en vigor el 1 de enero de 1994. No establece organismos centrales de coordinación política o social. Existe sólo una secretaría

(MERCOSUR)<sup>7</sup>, fortalecido mediante el Tratado de Asunción de 1991, aunque sus primeros pasos venían produciéndose desde 1985<sup>8</sup>, y más recientemente, la Unión de Naciones del Sur (UNASUR)<sup>9</sup>, cuya versión final del tratado constitutivo fuera ratificada en Brasilia, en mayo de 2008.

---

para administrar y ejecutar las resoluciones y mandatos que se derivan del tratado mismo, y las secciones correspondientes en los Estados miembros. Dentro de sus propósitos originales se encuentran la eliminación de fronteras para el comercio y otros obstáculos arancelarios, promover la inversión entre estos países, entre otros. La realidad, sin embargo, describe efectos negativos, agravados por la actual crisis económica (Fuentes: <http://www.fina.nafi.org/esp/integ/alena.asp?lang=esp&menu=integ>; [http://www.es.wikipedia.org/wiki/Tratado\\_de\\_Libre\\_Comercio\\_de\\_Am%C3%A9rica\\_del\\_Norte](http://www.es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_de_Am%C3%A9rica_del_Norte); DE LA CRUZ, R.: Tratado de Libre Comercio de la América del Norte (TLCAN). La experiencia de México, BANCO MEX, Guatemala, 2005).

<sup>7</sup> El 26 de marzo de 1991, los representantes de los gobiernos de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, firmaron el Tratado de Asunción, que da origen al Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Este instrumento buscaba establecer un mercado común, como nivel de integración económica, que estableciera la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, un arancel externo y una política comercial común, armonizados con políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados miembros y la adaptación de las legislaciones para fortalecer el proceso de integración (artículo 1 del Tratado). La ratificación del Protocolo de Ouro Preto puso fin a una primera etapa de transición, donde se sentaron bases para el desarrollo de los objetivos de MERCOSUR. En consecuencia, se crea una estructura institucional, dotando al MERCOSUR de personalidad jurídica internacional, a la par que se establecen las fuentes normativas de este mecanismo y se adopta un sistema de solución de controversias (Vid, ad. “Perfil de Mercado: Mercado Común del Sur MERCOSUR”, en Observatorio de Competitividad. Módulo de Inteligencia de Mercados, disponible en INTERNET y texto del Tratado de Asunción: <http://www.rau.edu.uy/mercosur/tratasp.htm>). No puede dejar de discutirse el nivel que MERCOSUR ha alcanzado como mecanismo, e incluso, no escapan las comparaciones respecto al modelo de la Unión Europea. VENTURA expone algunos puntos de interés sobre este particular en MERCOSUR. En tal sentido aclara que “el tratado que instituye el Mercosur no comporta ninguna analogía con los tratados europeos. El Mercosur nunca engendró un ordenamiento jurídico autónomo, en el cual el TAs [Tratado de Asunción] desempeñaría la función equivalente a la de una constitución en el orden interno. Sin embargo, es innegable que los actos normativos de las instituciones del Mercosur, una vez incorporados a los ordenamientos internos de los Estados miembros, derivan del TAs y deben estar conformes a él” (vid, VENTURA, D.: Las asimetrías entre el Mercosur y la Unión Europea. Los desafíos de una integración interregional, Biblioteca Jurídica Virtual de la UNAM, IIJ-UNAM, México, D. F., 2008). Sobre una línea de análisis similar cfr. MALAMUD, A. y SCHMITTER, P.: “La experiencia de integración europea y el potencial de integración del MERCOSUR”, en Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales, Vol. 46, No. 181, Buenos Aires, abril-junio 2006, pp. 3-31.

<sup>8</sup> Derivados una serie de documentos y conductas del gobierno argentino y brasileño expresados en algunas declaraciones y acuerdos: la Declaración de Foz de Iguazú (30/11/85) que creó una Comisión Mixta de Alto Nivel para la Integración; Acta para la Integración argentino-brasileña y el Programa de Integración y Cooperación Económica (29/7/86); Acta de Amistad argentino-brasileña denominada “Democracia, Paz y Desarrollo” 10/12/86, entre otros.

<sup>9</sup> Sobre UNASUR se harán repetidas referencias, por la importancia de este esquema y las proyecciones realizadas desde su reciente constitución. El 6 de mayo de 2008 apareció una versión final del Tratado constitutivo de la Unión de Naciones del Sur, rubricada por un importante grupo de Estados. En este instrumento se establece la estructura institucional de esta organización dotada de personalidad jurídica internacional. El propósito de UNASUR se expresa ampliamente en el artículo 3, a partir de los principios básicos que orientan la actividad de esta organización contenidos en buena parte del Preámbulo. Cabe destacar “el fortalecimiento del diálogo político entre los Estados Miembros que asegure un espacio de concertación para reforzar la integración suramericana”; “el desarrollo de mecanismos concretos y efectivos para la superación de las asimetrías”; “la consolidación de una identidad suramericana a través del reconocimiento progresivo de derechos a los nacionales de un Estado Miembro residentes en cualquiera de los otros Estados Miembros, con el fin de alcanzar una ciudadanía suramericana”; “la participación ciudadana a través de mecanismos de interacción y diálogo entre UNASUR y los diversos actores sociales en la formulación de políticas de integración suramericana”, y todo lo relativo a la cooperación económica, energética, etc., pilares de este esquema integracionista. En los artículos 11 y 12 del Tratado se establecen el

Entre los denominados *mecanismos de articulación* de la integración continental se encuentran la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)<sup>10</sup>, que fue constituida en 1980 a través del Tratado de Montevideo, en reemplazo de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC); el Sistema Económico Latinoamericano (SELA)<sup>11</sup>, producto del Convenio de Panamá de 17 de octubre de 1975 y la Asociación de Estados del Caribe<sup>12</sup>, como mecanismo de cooperación, instituido en julio de 1994 y compuesto por una amplia membresía de Estados. El Grupo de Río<sup>13</sup> constituye otro de los

---

sistema de fuentes y el procedimiento para aprobar y aplicar la normativa en la organización. Como oportunamente se analizará, constituye un paso en la integración continental, respetuoso de inicio con los esquemas subregionales existentes en el área, un factor circunstancialmente favorable, pero que deja abierto el mismo debate en torno al cauce por donde debe transitar la definitiva unidad continental -que no es contrario al discurso de *flexibilidad* y *progresividad* incorporado en los propósitos de este esquema-, pero que debe buscar una fórmula precisa para alcanzar la efectiva integración económica, política y jurídica.

<sup>10</sup> La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) se creó mediante el Tratado de Montevideo de 12 de agosto de 1980 que reemplazó al de 1960, que había dado origen a la antigua ALALC. Los principios de la integración latinoamericana en la ALADI son los de pluralismo, convergencia, flexibilidad y tratamiento diferenciado según el nivel de desarrollo relativo. Los principales instrumentos de integración en este esquema son los Acuerdos de Alcance Parcial, los Acuerdos de Complementación Económica y los Acuerdos Regionales. La naturaleza de este mecanismo, es básicamente comercial y como instrumento articulador de políticas económicas en el área. Participan como observadores una decena de países (Fuentes: [www.aladi.org](http://www.aladi.org); <http://www.mincomercio.gov.co/eContent/newsdetail.asp?id=233&id>).

<sup>11</sup> El Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) es un organismo regional intergubernamental, con sede en Caracas, Venezuela, integrado por 26 países de América Latina y el Caribe. Dentro de sus principales objetivos se encuentran la promoción de un sistema de consulta y coordinación para concertar posiciones y estrategias comunes de América Latina y el Caribe, en materia económica e impulsar la cooperación y la integración entre estos países. Su máximo órgano es el Consejo Latinoamericano, formado por representantes de cada Estado miembro, encargado de establecer las políticas generales del organismo y de decisiones que se aprueban por consenso. La Secretaría Permanente es el órgano técnico administrativo y operan también los Comités de Acción, organismos flexibles de cooperación que se constituyen a partir del interés de dos o más Estados Miembros en promover programas y proyectos conjuntos en áreas específicas, que pueden ser temporales o llegar a convertirse en órganos permanentes. (Fuente: <http://www.es.wikipedia.org/wiki/SELA>).

<sup>12</sup> El Convenio Constitutivo de la Asociación de Estados del Caribe se firmó el 24 de julio de 1994 en Cartagena de Indias, Colombia, con el propósito de promover la consulta, la cooperación y la acción concertada entre todos los países del Caribe. Está integrada por 25 Estados miembros y tres miembros asociados. Otros ocho países no independientes son elegibles como miembros asociados. Los principales objetivos esta Asociación son los siguientes: el fortalecimiento de la cooperación regional y del proceso de integración, con el propósito de crear un espacio económico ampliado en la región; preservar la integridad medioambiental del Mar Caribe, patrimonio común de los pueblos de la región; y promover el desarrollo sostenible del Gran Caribe. Sus áreas de atención son en la actualidad el comercio, el transporte, el turismo sustentable y la prevención de desastres naturales. La estructura institucional de la AEC descansa sobre un Consejo de Ministros, que es el principal órgano de formulación de políticas y de orientación de la Asociación, y la Secretaría General, y cuenta con el apoyo de varios comités especiales. Cuba es miembro pleno. (<http://www.acs-aec.org/sobre.htm>; [http://www.acs-aec.org/About/ACS\\_convention/convenio.htm](http://www.acs-aec.org/About/ACS_convention/convenio.htm) (texto del Convenio Constitutivo); [www.acs-aec.org](http://www.acs-aec.org)).

<sup>13</sup> El Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política (Grupo de Río) fue creado en diciembre de 1986. Se ha constituido en un importante mecanismo regional de diálogo político y en uno de los interlocutores más representativos de América Latina y el Caribe frente a otros países y grupos de países. Dentro de sus objetivos puntuales se encuentran: velar por la preservación de la paz ofreciendo soluciones propias a los problemas y conflictos que afectan a la región; ampliar y sistematizar la cooperación y el diálogo políticos; examinar y concertar posiciones sobre asuntos internacionales de interés común; promover el mejor funcionamiento de los organismos y procesos de integración y de cooperación latinoamericanos. Para el cumplimiento de estos propósitos se han creado varios niveles de diálogo que incluyen los Jefes de Estado y

foros de consulta política en el continente, con resultados apreciables en la actualidad, y al que ha sido incorporado recientemente como miembro pleno Cuba. Existen otras áreas en las relaciones de cooperación, como el Espacio América Latina + Caribe + Unión Europea. Lo más significativo respecto a estos mecanismos presentados responde, precisamente, a las formas o los niveles que dentro de la integración han adoptado y en qué medida aportan a la fundamentación desde bases jurídicas al proceso integracionista continental.

La primera conclusión que puede obtenerse es que en la mayoría de los ejemplos citados nos encontramos ante esquemas de cooperación económica o en el mejor de los casos, de integración económica, lo que no presupone la ausencia de instancias de decisión o coordinación de naturaleza política y de un marco normativo adecuado al papel, funciones y objetivos que cumplen estos esquemas, pero que dista regularmente de ofrecer una solución a la configuración jurídica de la integración continental *in extenso*.

El Tratado de Integración Económica Centroamericana, con el SICA como complemento, responde, por ejemplo, a un mercado común como forma de integración.

El CARICOM de igual manera se configura como comunidad y mercado común, lo mismo que la CAN, con el primer atributo, el de comunidad económica, con más fuerza<sup>14</sup>.

En el caso de la CAN ha existido la tendencia a buscar fórmulas cercanas o inspiradas en el modelo supranacional<sup>15</sup>. Sin embargo, en su seno se advierte un proceso de debilitamiento, agudizado por controversias políticas y económicas recientes entre sus miembros. Actualmente la situación de este esquema se muestra muy compleja, y las aspiraciones de construir un espacio de integración sobre los pilares de la *aplicabilidad directa* y *preeminencia* de un Derecho Comunitario, a semejanza del modelo europeo, parecen cada vez más difíciles. No obstante, debe reconocerse el valor que se ha ofrecido a la fundamentación desde bases jurídicas de su proceso de integración, saldo positivo ineludible de la CAN.

En el Mercado Común del Sur “la integración económica continúa siendo la finalidad primordial y básica (...) y la última razón de ser del esfuerzo conjunto de integración que

---

de Gobierno, los Ministros de Relaciones Exteriores y los Coordinadores Nacionales. Las reuniones en República Dominicana y Brasil en 2008, en la última de las cuales se incorporó a Cuba como miembro pleno, demostraron la importancia de este espacio de concertación genuinamente latinoamericano y caribeño, un impulso adicional para unir voluntades políticas en la construcción del proceso de integración regional. (Fuente: <http://www.sre.gob.mx/dgomra/grio/grio1.htm>).

<sup>14</sup> Sobre las formas de integración que adoptan estos esquemas, referencias tomadas de ZELADA CASTEDO, A.: Derecho de la Integración Económica Regional, BID-INTAL, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1989. Otras notas de interés y gráficos sobre aparato estructural de algunos de estos mecanismos (en especial, el MCCA, CARICOM, CAN, y MERCOSUR), en: “Los procesos de integración de América Latina y el Caribe en la encrucijada: perspectivas de futuro”, conclusiones del Seminario CEPAL-OBREAL-BID-INTAL presentadas en el Seminario Internacional “La nueva agenda de las relaciones comerciales internacionales tras el fin de la Ronda de Doha”, Barcelona, España, 2007, con apuntes complementarios de Ricardo CARCIOFI (disponible en INTERNET).

<sup>15</sup> Puede comprobarse esta idea, entre varios materiales, en: ROSELL, M.: Marco institucional y seguridad jurídica en la Comunidad Andina, Secretaría General de la Comunidad Andina, abril de 1999 (disponible en INTERNET), y SALGADO PEÑAHERRERA, G.: El Grupo Andino de hoy: eslabón hacia la integración de Sudamérica, Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador, 1995, p. 21. En este particular se señala que quienes pensaron en la conformación de la Junta del Grupo Andino en el Acuerdo de Cartagena se inspiraron precisamente en la Comisión de la Comunidad Económica Europea, con sus conocidos atributos supranacionales.



llevan a cabo estos Estados”<sup>16</sup>. Algunas opiniones reiteran que en la más estricta realidad solo nos encontramos “frente a una unión aduanera imperfecta y a una zona de libre comercio incompleta”<sup>17</sup>. Esto no significa desconocer el importante papel de la base intergubernamental, que constituyó una de las notas esenciales que permitió el nacimiento de MERCOSUR, y la obligatoriedad de recurrir por vía jurídica, ante cualquier intento de modificación estructural. Pero, a la vez, este hecho supone el desarrollo de un proceso de integración de características limitadas al campo de lo intergubernamental, sin que sus normas sustentadoras impliquen una transferencia de atributos propios de la soberanía estatal hacia una estructura ubicada por encima de los Estados descartándose también la tendencia a la supranacionalidad<sup>18</sup>.

La Unión de Naciones del Sur<sup>19</sup>, por su parte, ha avanzado en los fines de crear un esquema que supere la perspectiva de la integración económica, trazándose como objetivo “construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos”, como establece el artículo dos de su tratado constitutivo, no obstante existir algunos elementos discutibles en torno a la fundamentación desde bases jurídicas de la integración que este modelo propone.

Respecto a la Asociación Latinoamericana de Integración y el SELA, se conviene en caracterizarlos como mecanismos de articulación, no esquemas de integración en sí, y ya hemos analizado además la naturaleza de la Asociación de Estados del Caribe.

Se han tomado algunos de los esquemas presentes en el contexto latinoamericano actual, sin la intención de abarcar otros que, o bien existen en una porción geográfica más reducida o entre unos pocos Estados, o se mantienen como un proyecto no concluido o en proceso de negociación, que puede ser, incluso bilateral, como ha sucedido con algunas propuestas hemisféricas encabezadas por Estados Unidos bajo fórmulas basadas en la bilateralidad y el compromiso -que puede llegar a ser presión-. Pienso, en sentido general, en esquemas como el Grupo de los Tres, el Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA)<sup>20</sup> o el CAFTA+DR.

---

<sup>16</sup> DÍAZ BARRADO, C. M.: “Protocolo de Olivos para la solución de controversias en MERCOSUR adoptado el 18 de febrero de 2002: un paso adelante en la integración mercosureña”, en Revista Española de Derecho Internacional, Vol. LV-2003, No. 2, julio-diciembre, Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales-Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2004, p. 1097. Señala además que se han ido “añadiendo, no obstante, otras finalidades de distinta índole, tales como el logro de metas que se refieren a la *dimensión política* de la integración así como a la *dimensión social* de la misma”.

<sup>17</sup> Cfr., inter alia, “Integración y Supranacionalidad sin considerar los Desarrollos Europeos Recientes, Bases Constitucionales y Límites. La Experiencia del Mercosur”, en <http://www.farn.org.ar/docs/a04/art4-3.html>

<sup>18</sup> Sobre el alcance de la regulación constitucional argentina al respecto, y la comparación con el resto de las normas constitucionales de los Estados partes en MERCOSUR, cfr., VÁZQUEZ, A. R.: “Soberanía, supranacionalidad e integración: la cuestión en los países del Mercosur”, en Anuario Mexicano de Derecho Constitucional, 2007, pp. 233-244.

<sup>19</sup> No debe perderse de vista en el estudio del proceso de conformación de la Unión de Naciones del Sur los pasos previos que fueron concretándose en torno al proyecto de creación de la Comunidad Suramericana de Naciones (CSN). Sobre este particular, *vid*, DÍAZ BARRADO, C. M.: “La Comunidad Suramericana de Naciones: Propuestas y Realizaciones”, cit., entre otros.

<sup>20</sup> Sobre el ALCA también aparece una abundante bibliografía, tanto desde una postura crítica como desde sus posiciones de defensa. También de la polémica doctrinal y política desde la implementación del ALBA, han aparecido numerosos y muy valiosos materiales de consulta. De manera general se han revisado, entre otros: OROPEZA GARCÍA, A. (coord.): ALCA, un debate sobre la integración, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Centro Argentino para las Relaciones Internacionales, México, 2003; WITKER, J.: “Las negociaciones del ALCA en Puebla, México. Algunas reflexiones jurídicas”, en Anuario Mexicano de

De tal manera, puede afirmarse que la mayoría de estos proyectos no rebasan la perspectiva de una integración económica. El caso de MERCOSUR, con su indudable peso en el desarrollo económico sudamericano y la búsqueda de sustento político en las más importantes decisiones que se toman en su seno, así como el marco normativo que ha implementado lo convierten en uno de los mecanismos sobre los que se posee cierta confianza y, para muchos, en el ámbito de la teoría y la práctica económica y también jurídica, resulta el modelo más cercano a la idea de integración que debe desarrollarse en nuestra área geográfica. Sostengo, a pesar de esto, que su proyección hacia el resto del continente es limitada y, por lo tanto, no brinda una definitiva solución a la problemática del esquema integracionista más viable para alcanzar la unidad latinoamericana más allá de los términos económicos planteados, y sobre todo, con una plataforma jurídico-política adecuada.

La Unión de Naciones del Sur, en este instante, puede servir como una muestra positiva de lo que sería el empeño futuro para alcanzar la integración continental, en dimensiones más amplias, siguiendo los términos para aceptar adhesiones de otros Estados fuera de los límites del subcontinente sudamericano que introduce en su tratado fundacional. Está, sin embargo, el análisis de la proyección de este modelo: si deberá absorber de otros esquemas subregionales -propósito que, inicialmente, se limita a reconocer la importancia de *incluir* “todos los logros y lo avanzado por los procesos de MERCOSUR y la CAN, así como la experiencia de Chile, Guyana y Suriname, yendo más allá de la convergencia de los mismos”, evidentemente como parte del carácter *flexible* y *gradual* con que se concibe este proceso de integración (Preámbulo del Tratado constitutivo)-, aunque en algunos casos, como el MERCOSUR, las fortalezas son superiores, en contraposición a las realidades de la CAN, que como se ha dicho, atraviesa por un momento complicado y, si en definitiva, conducirá a América Latina a la formación de una estructura supranacional<sup>21</sup>, como vía

---

Derecho Internacional, Vol. V, 2005, pp. 521-540; MARTÍNEZ, O.: “ALBA y ALCA: el dilema de la integración o la anexión”, documento electrónico, Biblioteca Francisco Varona Duque de Estrada, Unión Nacional de Juristas de Cuba [consulta: junio de 2008]; DIETERICH, H.: “Integración latinoamericana antes que ALCA”, en La página de Dieterich: <http://www.rebelion.org>, [consulta: noviembre de 2007].

<sup>21</sup> La cuestión de lo que posteriormente se tratará bajo la concepción de vías para la lograr la *fundamentación desde bases jurídicas de la integración* no queda aclarada en el tratado constitutivo de la Unión de Naciones del Sur. Aquí se establecen elementos de interés como la idea citada: “*la integración suramericana debe ser alcanzada a través de un proceso innovador, que incluya todos los logros y lo avanzado por los procesos de MERCOSUR y la CAN, así como la experiencia de Chile, Guyana y Suriname, yendo más allá de la convergencia de los mismos*” (Preámbulo); “*este proceso de construcción de la integración y la unión suramericanas es ambicioso en sus objetivos estratégicos, que deberá ser flexible y gradual en su implementación, asegurando que cada Estado adquiera los compromisos según su realidad*” (Preámbulo); o que “*los actos normativos emanados de los órganos de UNASUR, serán obligatorios para los Estados Miembros una vez que hayan sido incorporados en el ordenamiento jurídico de cada uno de ellos, de acuerdo a sus respectivos procedimientos internos*” (artículo 12), sin embargo, no alcanzan a definir alguna de estas vías. Parece que la redacción misma del artículo 13 *ad finem* descarta la realidad inmediata de configuración de un esquema supranacional, al normar, dentro de “La adopción de políticas y creación de instituciones, organizaciones y programas”, que “*cualquier Estado Miembro podrá eximirse de aplicar total o parcialmente una política aprobada, sea por tiempo definido o indefinido, sin que ello impida su posterior incorporación total o parcial a la misma. En el caso de las instituciones, organizaciones o programas que se creen, cualquiera de los Estados Miembros podrá participar como observador o eximirse total o parcialmente de participar por tiempo definido o indefinido*”. Es destacable, no obstante, la mención expresa de la necesidad de emprender la integración con apego a las normas de Derecho, como queda redactado en una de las partes del Preámbulo: “*la integración es un paso decisivo hacia el fortalecimiento del multilateralismo y la vigencia del derecho en las relaciones internacionales (...)*”.



para lograr el propósito de extender la integración a toda la región latinoamericana, con todas las reservas que se conocen en torno a algunos temas, como el de la soberanía estatal, y las limitaciones que en cuanto a la propia denominación y alcance preliminar posee esta estructura que recién se estrena en el contexto político y económico del área. Este esquema, a mi juicio, ha sido conformado cautelosamente, cuidando algunos modelos preexistentes y sin una propuesta inmediata de constitución de un mecanismo político-jurídico superior.

No existe, por tanto, un modelo que satisfaga completamente las necesidades de dar cauce a la integración en América Latina, por lo pronto, pero esto no impide que pueda concluirse que sí aparecen puntos de interés en varios de los esquemas actuales y además proyecciones muy serias, aunque se mantenga la deuda con la fundamentación desde bases jurídicas del proceso integracionista, puesto que las temáticas del desarrollo económico no han encontrado refugio en las potencialidades del Derecho y las vías concretas de avanzar en la definitiva integración regional que nos proponemos se ven obstruidas, mientras las emergencias en estos campos particulares de la cooperación y el intercambio comercial y financiero dominan la agenda de los proyectos integracionistas, todavía lastrados por la subregionalización. Una cuestión es cierta: la grave situación por la que atraviesa el mundo en estos sectores se siente con especial repercusión en las economías latinoamericanas dañadas, entre otros factores, por las políticas neoliberales y, por ende, son las formas de paliar la crisis las que prevalecen; pero tampoco debe olvidarse que el recurso de la integración responde precisamente a la necesidad de contrarrestar los efectos de un embate al que difícilmente pueda sobrevivirse de forma aislada, y que posponer la hora de emprender con seriedad el rumbo hacia el esquema más viable para alcanzar una integración superior cobrará, tarde o temprano, un alto precio. Este mismo argumento de la no complementariedad, de la fragilidad y las asimetrías de nuestras economías puede interpretarse como uno de los obstáculos en el logro de la unidad continental, no obstante, en reiteradas ocasiones se ha expresado que nos enfrentamos a uno de los momentos coyunturales, y por tanto decisivos, para dar un gran paso en la formulación definitiva de los cauces de nuestra integración, como respuesta necesaria e inminente de esta crisis real y con perspectivas de prolongarse. Debe, por tanto, interpretarse este hecho, en sentido contrario: no como un óbice en nuestras aspiraciones como continente, sino en un elemento aglutinador, en un propósito compartido, que deberá ir más allá de las fórmulas tradicionales, que si en alguna medida han resultado exitosas, solo lo ha sido a una escala limitada, nunca con un alcance regional latinoamericano y caribeño.

## **2.1. La Alternativa Bolivariana para las Américas<sup>22</sup>.**

La Alternativa Bolivariana para las Américas<sup>23</sup> surgió como un proyecto de cooperación, que sistematizaba la iniciativa de los gobiernos de Venezuela y Cuba de encontrar en el

---

<sup>22</sup> Se ha decidido emplear esta denominación a lo largo de la tesis, si bien es frecuente escuchar el término *Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América*, complementado con el *Tratado de Comercio de los Pueblos* (iniciativa boliviana), lo cual no presupone se desconozca este importante título, tan amplio como los fines cada vez crecientes de este esquema en pleno proceso de consolidación.

<sup>23</sup> Algunos materiales consultados relativos la Alternativa Bolivariana para las Américas y en sentido general sobre las condiciones actuales en las que se desarrolla este proceso: ALBA ECONOMÍA (Revista de Economía Política) “ALBA. El camino de la nueva integración”, Año 1, No. 1, octubre-noviembre 2007, BANCOEX, Venezuela, pp. 47-48; Cuba Socialista (Edición electrónica): “¿Qué es la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe?”, <http://www.cubasocialista.cu/TEXTO/csalbaexp.html> [consulta:

intercambio solidario de bienes y servicios el equilibrio en el desarrollo de nuestros pueblos. Los pilares sobre los que se sustenta esta propuesta -y que constituyeron sus fundamentos originales- se concentran en torno a la cooperación en sectores tan sensibles como el energético, salud pública, educación, entre otros.

Desde diciembre de 2001 hasta el presente, este esquema no solo se ha ido ampliando en Estados que se han integrado, sino en la propia estructura y en su proyección. De tal manera, la Alternativa Bolivariana para las Américas se ha convertido en una propuesta seria de integración, sobre la que se hace necesario un riguroso análisis desde la perspectiva jurídica. Probablemente en cuarenta años de esfuerzos integracionistas ningún proyecto como el ALBA ha sido capaz de aglutinar estrategias de solidaridad y cooperación, más allá del intercambio económico que ha sido el eje que sostiene a la mayoría de las propuestas de integración subregional en América Latina.

A pesar de estas realidades, en un sector importante no es observada esta alternativa como un proyecto prometedor para el área, potencialmente generador de un esquema de integración superior. Existe un criterio<sup>24</sup> que reduce la efectividad del ALBA a un simple acuerdo de cooperación, que en última instancia será absorbido por alguna de las propuestas de mayor dimensión continental, probablemente la propia Unión de Naciones del Sur. Si bien este proyecto no es perfecto y posee limitaciones reales, lo que trata de valorarse en esta oportunidad son precisamente las potencialidades existentes para abrir paso a una integración en mayor grado, que defina entre otros aspectos un adecuado marco jurídico y que sea capaz de complementar los temas económicos con los políticos y sociales.

No es, como advirtieron algunos, un proyecto con un destino incierto y limitado en el tiempo y el espacio. La incorporación de Honduras y Dominica<sup>25</sup>, y recientemente, al

---

noviembre de 2007]; GUERRA VILABOY, S.: “Antecedentes históricos de la Alternativa Bolivariana para las Américas”, en Contexto Latinoamericano. Revista de Análisis Político, op. cit, pp. 149-162; GUEVARA RAMÍREZ, L.: “Aspectos jurídicos de la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA”, texto de la intervención en la Cumbre Social de los Pueblos de Cochabamba, documento electrónico, Biblioteca Francisco Varona Duque de Estrada, Unión Nacional de Juristas de Cuba [consulta: junio de 2008]; MARTÍNEZ, O.: “ALBA y ALCA: el dilema de la integración o la anexión”, cit; VASCÓS GONZÁLEZ, F.: “La integración política latinoamericana”, Política Internacional: <http://www.rebelion.org>; [consulta: noviembre de 2007]; SOTILLO LORENZO, J. A.: “La Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA): un nuevo espacio de la integración latinoamericana con dimensión social”, Social Watch, 2007 (disponible en INTERNET); FRITZ, Th.: ALBA contra ALCA. La Alternativa Bolivariana para las Américas: una nueva vía para la integración regional en Latinoamérica, Centro de Investigación y Documentación Chile-Latinoamérica, Berlín, 2007 (disponible en INTERNET).

<sup>24</sup> Teniendo en cuenta que la realidad del ALBA ha superado lo que en sus momentos fue calificado como “mera respuesta política” a la propuesta neoliberal del Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA), como se comenta en la Introducción de esta investigación. Este es el producto además de la predisposición que ideológicamente despierta en muchos sectores la conformación de una alternativa integracionista no sujeta a los cánones mercantilistas y a la lógica del neoliberalismo global. El profesor SOTILLO LORENZO reconoce que “la Alternativa Bolivariana para la América Latina y el Caribe merece ser analizada como una opción de integración regional que no debería descartarse debido a razones estrictamente ideológicas”, siguiendo el criterio sostenido en *Dossier: ALBA Alternativa Bolivariana para América Latina*, FLACSO, San José, Costa Rica, 2007 (cfr. SOTILLO LORENZO J. A.: cit, p. 147.). Sin embargo, todavía muchos de los detractores de este esquema continúan esgrimiendo argumentos de esta naturaleza, insostenibles ya por la propia experiencia histórica y los resultados del ALBA, en su corto tiempo de aplicación.

<sup>25</sup> Los instrumentos de adhesión de ambos países pueden consultarse en el vínculo correspondiente del sitio web: <http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=230>.

concluir la reunión de la Comisión Política del ALBA<sup>26</sup>, la posición de interés mostrada por Ecuador de convertirse en miembro pleno de esta alternativa, demuestran todo lo contrario. Es más, a pesar de contar aún con una membresía reducida, ha superado los espacios geográficos para aglutinar Estados de América del Sur, Centroamérica y el Caribe. La cooperación energética representa un firme pilar. A esto deben sumarse los planes de intercambio justo de bienes y servicios -ejecutados en muchos de los casos de acuerdo a la normativa del Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP)<sup>27</sup>, y en particular mediante los proyectos *grannacionales*<sup>28</sup>, figura novedosa incorporada en la Alternativa Bolivariana para las Américas- y el papel de los recursos humanos, como sucede en las misiones sociales. Los servicios médicos y educacionales, los planes de desarrollo endógeno, los foros sociales que se han constituido y los movimientos en defensa de la paz y los derechos de

---

<sup>26</sup> Reunión de la Comisión Política de la VI Cumbre de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que sesionó en los primeros días de marzo de 2009, en Venezuela. Entre los acuerdos más sobresalientes se encuentra la creación de una Comisión Permanente, instancia que “una vez que los presidentes acuerden las directrices, concretará y dará seguimiento a los proyectos, y establecerá el avance, así como las respectivas recomendaciones” que le sean sometidas. Este constituye otro importante paso en la institucionalización del ALBA. El primer período de coordinación corresponderá a Venezuela, en los próximos dos años, y como tareas inmediatas tendrá la evaluación de proyectos grannacionales en ejecución, especialmente en el área de la alimentación. Dentro de esta Reunión también se abordaron temáticas sobre la política financiera del Banco del ALBA y las perspectivas de incorporación de nuevos miembros a la alternativa.

(Cobertura informativa, entre otros medios:

<http://granma.cu/espanol/2009/marzo/lun2/crean.html>; [http://www.tiempo21.cu/alba/hechos/marzo09/crean\\_comision\\_permanente\\_alba\\_090302.htm](http://www.tiempo21.cu/alba/hechos/marzo09/crean_comision_permanente_alba_090302.htm)).

<sup>27</sup> El Tratado de Comercio de los Pueblos, suscrito en La Habana, en abril de 2006 entre los mandatarios de Bolivia, Venezuela y Cuba, establece en su artículo segundo: “Los países elaborarán un plan estratégico para garantizar la más beneficiosa complementación productiva sobre bases de racionalidad, aprovechamiento de ventajas existente en los países, ahorro de recursos, ampliación de empleo, acceso a mercados u otra consideración sustentada en una verdadera solidaridad que potencie nuestros pueblos”, precepto que resume los objetivos fundamentales del Acuerdo.

<sup>28</sup> Este novedoso término ha sido incorporado en el marco de los acuerdos de cooperación entre los Estados miembros del ALBA, en diversas áreas. A raíz de la celebración de la V Cumbre de esta alternativa, en 2007, se aprobaron una serie de proyectos grannacionales, en las esferas de la educación (vgr., “Plan Grannacional para el desarrollo de la misión de alfabetización en los países miembros del ALBA y en otros de América Latina y el Caribe, con la integración de las experiencias obtenidas en Cuba, Venezuela y Bolivia”); salud pública (“Plan Grannacional para el desarrollo de la Misión Salud de los países del ALBA que conduzca los planes en sus distintos niveles y optimice la inversión y los recursos para la recuperación e implantación de sistemas públicos de salud de acceso universal en todos nuestros países, así como el suministro y los instrumentos para la investigación y desarrollo para el aprovechamiento del recurso de biodiversidad de nuestra región”); cultura (vgr., “Fondo Cultural del Alba para la producción y distribución conjunta de cine, coproducción grannacional de espacios de radio y televisión, edición y distribución latinoamericana de libros y publicaciones, conformación de redes de librerías compartidas...”); alimentación (“Creación de una empresa Grannacional de producción Agroalimentaria”); entre otras, donde cabe destacarse el sector energético -con específicas inversiones en Estados miembros y otros de la región para la construcción o remodelación de plantas industriales, suministro de hidrocarburos, etc., como parte de acuerdos de integración que rebasan los marcos del ALBA, como PETROCARIBE -, turismo, finanzas -el recién constituido Banco del ALBA es uno de los ejemplos más importantes en este rubro-, comercio justo (con aplicación del TCP) y telecomunicaciones. Se trata de proyectos basados en los principios de solidaridad y complementariedad, donde se busca un intercambio justo y multisectorial, más allá de las ganancias individuales de las empresas líderes nacionales en estos renglones. Sobre la esencia y fundamentos de esta denominación (“grannacional”), consúltense el Anexo 8.2.

los pueblos complementan este proyecto, que a mi juicio ha superado su condición de simple marco de cooperación para fraguar como esquema de integración.

Los anteriores factores resultan de profunda importancia al momento de evaluar el escenario donde puede darse un primer y fundamental paso en aras de lograr la plena integración continental, sobre la base no solo de los presupuestos económicos, políticos y sociales, con tendencia a resultar favorables en el contexto actual, sino además de los fundamentos jurídicos e institucionales que, ineludiblemente, deben sostener el proceso integracionista en América Latina, una vez determinada la vía más correcta para concretarlos, empeño al que debe dirigirse la atención con la urgencia requerida.

### **3. El debate en torno a las fórmulas para la integración y su incorporación en el proceso integracionista continental.**

Independientemente de la posibilidad de la existencia de distintas fórmulas aplicables a la integración regional, que presuponen emplear las herramientas que el Derecho ofrece en aras de construir un proceso fundamentado jurídica y políticamente, se hará referencia en esta oportunidad a dos de los modelos que más atención han despertado de la comunidad académica en general, y que en alguna medida han sido llevados a la práctica en distintas áreas geográficas, aun cuando no exista consenso en su denominación definitiva, y puedan verse relativizados por algunas *especies* novedosas en el amplio marco de formulaciones teóricas<sup>29</sup> y caracterizaciones propias de un proceso en construcción: el modelo *supranacional*, y el *confederal*.

---

<sup>29</sup> Dentro de estas formulaciones, variadas y complejas, pueden mencionarse algunas aplicables tanto al fenómeno de la integración regional, que opera *ad extra*, como a otros procesos que implican una descentralización *ad intra* de manera paralela, elementos que han determinado la “mutación de la naturaleza jurídico-política del Estado” (LÓPEZ PORTA), provocada en gran medida por la pérdida de poder real que se experimenta en el aparato estatal debido a la progresiva cesión de las competencias que antaño eran exclusivas de los Estados nacionales y que ahora deben compartirse en el seno de una estructura económica, política y jurídica superior, y someterse a las exigencias de las estructuras territoriales internas de ganar en autonomía e independencia funcional -vgr., en los Estados federales propiamente, y de manera particular en los Estados autonómicos y regionales-. Estas, de forma general, responden a la noción de nuevo federalismo (*kooperativen foederalismus*; *new federalism*), y agruparían denominaciones como la de *federalismo por analogía* (KUNZ) -mezcla de los presupuestos federales y confederales sobre la base de los principios (como los sistematiza LA PERGOLA) de cohesión socioeconómica, legitimación democrática y supremacía del Derecho, formulación teórica muy seguida sobre todo ante la indefinición del modelo actual de la Unión Europea, que supone además una hibridación entre los elementos del sistema comunitario con tendencia al federalismo y un procedimiento que recuerda al de las confederaciones-; *confederación moderna* (LA PERGOLA), caracterizada por su nacimiento en el proceso de integración política y la consecuente influencia sobre sus estructuras, por la falta de un Estado en el centro, la ampliación de los derechos reconocidos a los individuos en yuxtaposición al reconocimiento hecho por el Estado de origen, dando lugar a una ciudadanía común con fundamento constitucional, situaciones que a juicio de este autor son perfectamente aplicables a la integración europea y, como se habrá podido comprobar, superan la noción clásica de Confederación de Estados (cfr., el excelente trabajo de la profesora María Begoña LÓPEZ PORTA intitulado “El Estado en los procesos de integración y descentralización política. Una reflexión sobre su naturaleza política y jurídica”, en Revista de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, RDUNED, No. 2, 2007, pp. 283-324 y, además, los autores de referencia: KUNZ: “International Law by Analogy”, en American Journal of International Law, Vol. 45, 1951; LA PERGOLA, A.: Los nuevos senderos del federalismo, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1994). Otros términos son empleados en la explicación teórica del fenómeno integracionista y sus fórmulas: *multilevel governance*, *multilevel constitutionalism*, concepto “*postnational*” de la Constitución. PRADO SIFONTES (“El Derecho y su incidencia en el proceso de

La alternativa supranacional, sobre la que parecen configurarse las principales instituciones y normas en la Unión Europea, da muestras de haber ganado espacios, consolidando los mecanismos jurídicos necesarios para encauzar el proceso de integración<sup>30</sup>. Políticamente ha sido aceptada, a pesar de quedar puntos del debate sin cerrar como sucedió, por ejemplo,

---

integración”, en Revista Cubana de Derecho, No. 31, junio de 2008) agrupa varias de las teorías en torno a la determinación de la naturaleza del proceso de integración regional, fundamentalmente las teorías *federalistas* y las llamadas teorías *interestatales*. En el primer grupo se encuentran, entre otras, las *funcionalistas* (MITRANY, sustentada en la idea de cooperación entre Estados, de transferencia progresiva de “lealtades nacionales” a organismos supranacionales, etc.) y las *neofuncionalistas* (NYE, HAAS, que predicaban esencialmente la obsolescencia del Estado-nación como categoría, su retirada y la apertura a la supranacionalidad). En el segundo grupo aparecen algunos postulados como los de *comunidad de seguridad* (TAYLOR, HOFFMAN, DEUTSCH), pero en definitiva se concentran en rechazar la noción de que el Estado deja de ser la principal unidad política del sistema comunitario, negando al mismo tiempo la transferencia de lealtades desde los Estados-nación hacia organismos supranacionales, asumiendo la primacía del Estado en el proceso de integración como punto de partida. Emplean además términos como *soberanía compartida*. Al lenguaje doctrinal de este grupo deben sumarse categorías como la de *intergubernamentalismo*, *flexibilidad*, *nuevo institucionalismo*, *fusión*, todas aplicadas en el contexto de la integración regional, aunque no resulten más que “variaciones” de las teorías clásicas. Por su parte MALAMUD y SCHMITTER, en el artículo citado, resumen una buena parte de estas teorías y añaden otras, que han tenido espacio fundamentalmente en Europa, a pesar de que “por desgracia, no existe ninguna teoría prevaleciente acerca de por qué y cómo funcionó la integración en Europa”. Entre estas las del *enfoque regulador*, *racionalismo*, *constructivismo*, *reflectivismo*, *institucionalismo*, *Poly-Centric Governance* (PCG), etc.

<sup>30</sup> Otros materiales complementarios en el complejo análisis de la realidad europea de cara al proceso de integración regional, sus dilemas, enseñanzas y perspectivas: HÄBERLE, P.; HABERMAS, J.; KOTZUR, M.; FERRAJOLI, L.; ERMANN, V.: La constitucionalización de Europa, Biblioteca Jurídica Virtual de la UNAM, IJ-UNAM, México, D. F., 2008; PÉREZ CARRILLO, E.: “El Tratado de Niza. Entre la consolidación de la Unión Europea de Maastricht y el debate sobre el futuro de Europa”, en Anuario Mexicano de Derecho Internacional, Vol. II, 2002, pp. 305-334; PÉREZ CARRILLO, E.: “Unificación y cohesión del continente europeo. Principales instrumentos económicos y jurídicos para la ampliación al este”, en Anuario Mexicano de Derecho Internacional, Vol. III, 2003, pp. 301-327; ACOSTA ESTÉVEZ, J. B.: “La interdependencia entre el Derecho Internacional y el Derecho Comunitario europeo”, en Anuario Mexicano de Derecho Internacional, Vol. V, 2005, pp. 13-50; TORRES ESPINOSA, E.: “Integración europea y globalización. Una perspectiva institucional”, en Anuario Mexicano de Derecho Internacional, Vol. V, 2005, pp. 499-519; TORRES ESPINOSA, E.: “El Estado-nación y la Unión Europea. ¿Hacia una necesaria reformulación de lo estatal?”, en Anuario Mexicano de Derecho Internacional, Vol. VI, 2006, pp. 551-575; LÓPEZ BASAGUREN, A.: “¿Réquiem por la Constitución? El ordenamiento constitucional en la integración comunitaria”, en Civitas Europa. Revista Jurídica sobre la evolución de la Nación y el Estado en Europa. No. 2, marzo, Presses Universitaires de Nancy, 1999, pp. 7-30; MATALA-TALA, L.: “La construction politique européenne: plaidoyer pour un nouveau contrat social”, en Civitas Europa. Revista Jurídica sobre la evolución de la Nación y el Estado en Europa. No. 1, septiembre, Presses Universitaires de Nancy, 1998, pp. 109-124; PÉREZ CALVO, A.: “La dimensión comunitaria del Estado en Europa occidental”, en Civitas Europa. Revista Jurídica sobre la evolución de la Nación y el Estado en Europa. No. 1, septiembre, Presses Universitaires de Nancy, 1998, pp. 19-34; PIERRE-CAPS, S.: “L’Union européenne, demos et légitimité: de l’Etat-nation à la Multination”, en Civitas Europa. Revista Jurídica sobre la evolución de la Nación y el Estado en Europa. No. 1, septiembre, Presses Universitaires de Nancy, 1998, pp. 35-54; RUBIO NÚÑEZ, R.: “El proyecto de una Constitución para Europa. Confederación de Estados, Unión de Ciudadanos”, en Nueva revista de política, cultura y arte, No. 88, Madrid, 2003, pp.2-12; DE CASTRO SÁNCHEZ, C.: “De la cooperación política europea a la Política Exterior y de Seguridad Común”, en Boletín de la Facultad de Derecho, No. 15, Segunda Época, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 2000, pp. 237-268; SÁENZ DE SANTAMARÍA, P. A. et al: Introducción al Derecho de la Unión Europea, Editorial Eurolex, Madrid, S. L., 1996; GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, I.: “El referéndum sobre la Constitución para Europa”, <http://INTEGRACIONpoliticaUE/referendoconstitUE.mht> [consulta: noviembre de 2007].



con la cuestión de la adopción de una Constitución para Europa<sup>31</sup>. Pero el hecho ya de pensar y poner a examen este particular<sup>32</sup> demuestra la confianza y la necesidad de acudir al Derecho para dejar bien sellados los compromisos entre los sujetos participantes en este proceso.

Respecto a la Unión Europea, tanto para los que comparten este criterio como para quienes ofrecen sus reservas, debe apuntarse que se ha convertido en una especie de referente, lo que no equivale a decir que sea de obligatoria reproducción en otras áreas geográficas, como la nuestra. En materia de desarrollo jurídico, el Derecho Comunitario -o en buena técnica, el *Derecho Europeo*- se ha realizado amplia y eficazmente, lo que equivale a decir que esta estructura goza de un fundamento normativo sólido. Lo mismo sucede respecto a la institucionalidad, que es una de las facetas que permite valorar el grado de desarrollo de determinado proceso de integración regional. No puede asumirse que es un esquema

---

<sup>31</sup> Los vaivenes a los que se vio sometido el *Tratado por el que se establece una Constitución para Europa* (desde que el Consejo de Niza analizara y propusiera la elaboración de un instrumento jurídico que condujera a una mejor delimitación competencial entre la Unión y los Estados miembros, a lo que dieron respuestas sucesivas los Consejos de Laeken, Bruselas y Roma, hasta la firma en octubre de 2004 del texto de este tratado constitucional, sometido desde ese momento a la ratificación por los Estados miembros), especialmente las votaciones negativas en las consultas populares en Francia (54.87% por el “no”), y Holanda (61.6%), no permiten asumir de manera absoluta el éxito de una propuesta que sustentara “constitucionalmente” el proceso de integración europea, visto desde el prisma del apoyo popular. Sin embargo, políticamente, parece dominante la idea de llevar a vías de hecho un instrumento convencional que opere como Constitución formal de la Unión -lo que no pretende desconocer el carácter “constitucional” con el que se reconocía a los tratados fundacionales de las comunidades europeas y particularmente al Tratado de la Unión Europea (TUE) de 1992, con sus sucesivas ampliaciones-. Esto se ha puesto de manifiesto con la firma de las reformas al TUE y la adopción de un *Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea* (TFUE) -sustitutivo del Tratado Constitutivo de las Comunidades Europeas, aunque como señala PÉREZ DE NANCLARES “difícilmente se podía haber pensado en una denominación más alejada del lenguaje constitucional y más acorde con los viejos postulados funcionalistas que el de *Tratado de Funcionamiento*”-, en Lisboa, en diciembre de 2007 -a entrar en vigor en 2009-, al término de la Conferencia Intergubernamental organizada para tales fines, que si bien se ha dado a la publicidad como un “tratado simplificado”, no deja de ser complicado (un “tratado simplificado muy complicado”, en palabras del mandatario luxemburgués Jean Claude Juncker). No obstante, la idea a defender radica en la posición política mantenida en Europa respecto a la necesidad de instrumentar jurídicamente el marco de funcionamiento competencial de la Unión respecto a sus miembros, aspecto esencial en la consolidación de la integración regional -en este caso con profundos, pero no absolutos, ribetes de supranacionalidad-. Sobre el alcance de este proceso y del Tratado de Lisboa numerosa bibliografía, pero en particular resulta muy interesante el estudio preliminar realizado por el profesor José MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, que puede consultarse en: <http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/FuturoEuropa/TratadodeLisboa2007>.

<sup>32</sup> Tarea que ha correspondido a los órganos jurisdiccionales internos de varios Estados europeos, que han debido dictaminar sobre la procedencia de esta normativa. En el caso de España, por ejemplo, puede consultarse la Declaración 1/2004 del Tribunal Constitucional Español sobre la conformidad con la Constitución del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, en algunos de sus preceptos fundamentales, que comenta y reproduce en sus aspectos más interesantes el profesor VIDAL PRADO (“La compatibilidad del Tratado Constitucional Europeo con la Constitución española”, en *Persona y Derecho*. Revista de fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos, Vol. 55, II, Servicio de Publicaciones Universidad de Navarra, 2006, pp. 999-1055). También sobre el debate y la forma en que ha calado el Derecho Comunitario en los ordenamientos internos, de este mismo autor véase “El impacto del nuevo Derecho europeo en los tribunales constitucionales”, Editorial COLEX, Madrid, 2004. En ambos casos, con una perspectiva constitucionalista más marcada, se pone de relieve la idea sostenida de la puesta a examen casi cotidianamente de los aspectos jurídicos de la integración europea, lo que da un enorme valor a la búsqueda de seguridad y confianza en las bases de la integración regional propuestas por y desde el Derecho. En cuanto al Tratado de Lisboa, ver la LO 1/2008, de 30 de julio, fundamental en este examen de posiciones.



perfecto, ni que en su funcionamiento es infalible. La tendencia a la supranacionalidad va demostrándose -aunque se ha reiterado lo peligroso de los términos absolutos-, al menos a través de sus órganos comunes (especialmente el Consejo, la Comisión, el Parlamento y el Tribunal de Justicia)<sup>33</sup>, que en buena medida vienen a dibujar en un plano superior los tradicionales poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial), a pesar de la resistencia teórica que ha debido enfrentar<sup>34</sup>.

Respecto a América Latina, sin embargo, aquí reside uno de los mayores problemas. Como se ha dicho, después de más de cuatro décadas de esfuerzos serios en la idea de integración, no ha podido arribarse, al menos por consenso, a la conclusión de cuál pudiera ser la vía más aceptable para emprender el proceso de integración continental más allá de las subregiones y los acuerdos multilaterales existentes, en ocasiones bastante restringidos o dispersos, de tal manera que ante esta primera fórmula propuesta nos encontramos con una férrea oposición, que se fundamenta en las mencionadas cuestiones de la soberanía y los nacionalismos<sup>35</sup>, heredados de los procesos emancipatorios continentales. Se descuida la realidad impuesta por las condiciones actuales en el sistema internacional<sup>36</sup>, donde la

---

<sup>33</sup> Para el estudio de las normas que establecen las competencias de estos órganos y que dibujan en definitiva toda la arquitectura *constitucional* de la Unión Europea se han revisado los textos “Tratado de la Unión Europea, Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y otros actos básicos de Derecho Comunitario”, 9na. Edición actualizada, Editorial Tecnos, Madrid, 2001, edición a cargo de Araceli MANGAS MARTÍN, y de “Derecho Constitucional. España y Unión Europea”, 4ta. Edición, Códigos Ariel, 2002, dirigida por José Juan GONZÁLEZ ENCINAR, junto con la normativa actualizada, especialmente tras la adopción del TUE modificado y el TFUE, a los que se hace mención en esta investigación.

<sup>34</sup> Resistencia comprobada en la indefinición misma respecto al esquema de integración europea. A las múltiples teorías que se han enunciado *supra* debe añadirse otro grupo diverso de planteamientos relativos a la naturaleza jurídica de este proceso integracionista. Entre estos los que sostienen que Europa marcha hacia alguna de las fórmulas federalistas comentadas, o que se trata de una especie de híbrido entre lo federal y lo confederal, tal vez una *confederación blanda*. Sin ánimo de volver sobre estas disquisiciones doctrinales, solo debe apuntarse que este último aspecto fue muy discutido al tenor del artículo I-60 del Tratado por el que se establecía una Constitución para Europa, que tantos obstáculos encontró, sobre la base de la posibilidad de la “retirada voluntaria” de algún Estado miembro, que viene a recordar -aunque sin establecer una plena analogía- al *derecho de secesión* presente en las confederaciones, y que como ha quedado debidamente expuesto no cabe en la noción federal clásica, y no resulta absolutamente compatible con la noción de supranacionalidad, en su concepción más absorbente. Este, por supuesto, es apenas uno de los tantos asideros teóricos para los defensores de la tendencia confederal, o al menos, antifederalista, pero que viene a ilustrar una resistencia actual, que probablemente encuentre nuevos rumbos con la definitiva entrada en vigor del TFUE y el TUE reformado.

<sup>35</sup> Este carácter nacionalista heredado de siglos de constantes luchas por reivindicar la independencia de nuestros pueblos, “ha generado un sentimiento de profundo rechazo a la participación de fuerzas extranjeras en la solución de los problemas nacionales”, como se explica en VASCÓS GONZÁLEZ, F.: “Alternativa Bolivariana para las Américas: hacia una Confederación de Estados”, en *Granma.*, viernes 15 de junio de 2007, p.5.

<sup>36</sup> Complementan esta realidad y necesidad de la interrelación entre los Estados y transformación del carácter y alcance de la soberanía, otros fenómenos esenciales, sobre los cuales solo pretende hacerse mención. Se trata de la globalización y sus efectos, y particularmente el destino que en este contexto debe correr el Estado-nación como categoría. Sobre estos aspectos han sido consultados en esta investigación, además de algunos materiales citados: MORENO DURAZO, L. C.: “Soberanía nacional, globalización y regionalización”, en El papel del Derecho Internacional en América. La soberanía nacional en la era de la integración regional, Biblioteca Jurídica Virtual de la UNAM, IIJ-UNAM, México, D. F., 2008, pp. 263-272; HINOJOSA MARTÍNEZ, L. M.: “Globalización y soberanía de los Estados”, Revista Electrónica de Estudios Internacionales, 2005, pp. 1-14, ([www.reei.org](http://www.reei.org)); DUEÑAS MUÑOZ, J. C.: “Soberanía y Estado constitucional: su importancia en la integración y en el derecho comunitario”, en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, 2007, pp. 741-760; KAPLAN, M.: Estado y Globalización, Serie Doctrina

soberanía no puede observarse como atributo con carácter ilimitado dentro del Estado<sup>37</sup>, sino que la necesidad de interrelación de los sujetos que forman parte de este sistema presupone la cesión de ciertas competencias tradicionalmente denominadas “soberanas”, muchas de ellas para favorecer precisamente el proceso de integración. A ello deben sumarse las reservas siempre empleadas contra todo lo que parezca proclive a copiarse, o incluso, imponerse, sobre todo si proviene de Europa<sup>38</sup>.

---

Jurídica Núm. 90, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F., 2002; CARPIZO, J.: “Globalización y los principios de soberanía, autodeterminación y no intervención”, en *Anuario Mexicano de Derecho Constitucional*, Vol. IV, 2004, pp. 117-148; TORRES ESPINOSA, E.: “Integración europea y globalización. Una perspectiva institucional”, cit.; TORRES ESPINOSA, E.: “El Estado-nación y la Unión Europea. ¿Hacia una necesaria reformulación de lo estatal?”, cit.

<sup>37</sup> En este sentido abundante referencia sobre el carácter de la soberanía en el contexto internacional actual. En los textos de Derecho Internacional Público esta temática es de obligatorio estudio. Menciónense, por ejemplo, DIEZ DE VELASCO, M.: *Instituciones de Derecho Internacional Público*, 15ta. Edición, Editorial Tecnos, Madrid, 2005; CARRILLO SALCEDO, J. A.: *Curso de Derecho Internacional Público. Introducción a su estructura, dinámica y funciones*, Editorial Tecnos S. A, 1ra. Edición, 2da. Reimpresión, Madrid, 1994, p. 18; PASTOR RIDRUEJO, J. A.: *Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales*, 4ta. Edición, Editorial Tecnos S. A., Madrid, 1992, p. 298; HERDEGEN, M.: *Derecho Internacional Público*, Biblioteca Jurídica Virtual de la UNAM, IIJ-UNAM, México, D. F., 2007, pp. 216-220 y pp. 243 y ss; BECERRA RAMÍREZ, M.: *Derecho Internacional Público*, Biblioteca Jurídica Virtual de la UNAM, IIJ-UNAM, México, D. F., 2007, pp. 17 y 18; PINO CANALES, C. et al: *Temas de Derecho Internacional Público*, Editorial Félix Varela, La Habana, 2006, pp. 68-70, entre otros. Con una excelente complementación histórica, desde la perspectiva de la normativa y jurisprudencia internacional sobre el tema de la soberanía, *cfr.*, DE CASTRO SÁNCHEZ, C.: *Las acciones armadas por razones humanitarias ¿hacia una injerencia humanitaria? Una aproximación teórico-práctica*, Tesis doctoral, Ediciones del Ministerio de Defensa, Madrid, 2005, pp. 31-42. Igualmente rica es la doctrina en torno al principio de igualdad soberana de los Estados consagrado en la Carta de Naciones Unidas, por lo que sería bastante difícil citar una bibliografía recomendable que no fuese en todos los casos extensa. A esto deben sumarse los textos sobre Teoría General del Estado y Derecho Constitucional o Político, varios citados a lo largo de esta tesis. Quisiera remitir también a algunas notas del profesor Peter HÄBERLE (*cfr.*, HÄBERLE, P. y KOTZUR, M.: *De la soberanía al Derecho Constitucional Común: palabras clave para un diálogo europeo-latinoamericano*, Biblioteca Jurídica Virtual de la UNAM, IIJ-UNAM, México, D. F., 2006, pp. 48-56) en relación a la posición, poco estudiada y con tanta riqueza, de algunos textos constitucionales africanos respecto a la soberanía nacional frente al proceso de integración y la unidad africana, donde evidentemente no se ha podido avanzar al mismo ritmo que otras áreas geográficas. En este caso me ha llamado la atención el sentido superador de algunas Cartas Magnas como la de Burkina-Faso, que en su artículo 146 prevé que se “puede celebrar con todo Estado africano acuerdos de asociación o comunidad que impliquen una renuncia total o parcial de la soberanía”. Igualmente sucede con la Constitución de Níger de 1996, que ha incorporado un enunciado análogo en su artículo 122 y opera como cláusula de renuncia de la soberanía, entre otros muchos ejemplos que expresan criterios comunes hacia este proceso integracionista y sus consecuencias aunque, en definitiva, las condiciones objetivas de aquel continente no hayan permitido alcanzar el éxito deseado. Muchos de estos ejemplos son solo comparables, “tendencialmente”, con algunos postulados en ordenamientos constitucionales europeos, como el artículo 24 de la Ley fundamental alemana, pero sin parangón alguno en Latinoamérica. A lo largo de este texto importantes reflexiones sobre la cuestión de la soberanía bajo el influjo de la globalización y la integración regional en Europa y, particularmente, en nuestro continente.

<sup>38</sup> Donde, como señaló Jean MONNET, “no habrá paz (...) si los Estados deciden reestablecerse sobre la base de la soberanía nacional (...) Los países europeos son demasiado pequeños (...) Para disfrutar de la prosperidad y el progreso social (...) deben formar (...) una ‘Entidad’ europea que los haga una sola unidad económica” (*Memoirs*, Collins, Londres, 1978, p. 222). A lo que debe sumarse, inobjetablemente, la necesidad de formar un cuerpo político y una entidad jurídica lo suficientemente sólida para confiarle estos atributos soberanos, tan discutidos y defendidos.

Nada obliga a que se diseñe un modelo idéntico al que con matices de supranacionalidad se construye actualmente en el continente europeo. Pero nada puede, paralelamente, persuadirnos de que no es necesario llevar a otros términos<sup>39</sup> nuestra integración, salvaguardar nuestras soberanías pero compartir lo que tenemos, ceder nuestros espacios en función del equilibrio continental, aliarnos estratégicamente para enfrentar las amenazas provenientes de lugares bien conocidos y cercanos, enfrentar con solidez las repetidas y cada vez más peligrosas crisis económicas y sociales, y también políticas.

En este sentido, la idea de integración latinoamericana probablemente no persiga formar una ciudadanía común en una primera instancia (aun cuando hemos corroborado las aspiraciones de esquemas como UNASUR de crear las condiciones para asumir la configuración de una *ciudadanía suramericana*, en la letra de su tratado fundacional, y cuando además se maneja el discurso *inclusivo* de la sociedad civil en la construcción de la integración latinoamericana), apelando a factores geográficos y quizás a estas cuestiones nacionalistas. La integración en América Latina puede prescindir si desea de un complejo entramado de instituciones, conformándolas con un mayor grado de sencillez y operabilidad. La unidad monetaria puede también esperar (si bien debe atenderse a las propuestas más recientes como el *Sistema Único de Compensación Regional* -SUCRE-, que comienza a circular como una interesante alternativa financiera para nuestra región). En definitiva, existen múltiples variantes para sortear los escollos que hoy vemos en la supranacionalidad, y para superar estas reservas que aún oponemos y que dificultan el anhelo de vernos formando un gran espacio de solidaridad e intercambio, sobre la base de fundamentos sólidos que en lo político y jurídico deberán construirse.

Debe, a su vez, confiarse en el robustecimiento de los principios de Derecho Internacional, particularmente el de igualdad soberana de los Estados<sup>40</sup>, con las consecuencias que de él se

---

<sup>39</sup> GUDYNAS argumenta que “una integración regional alternativa requiere comenzar a analizar nuevos temas, como la generación de políticas productivas comunes, *el establecimiento de una normativa supranacional* [cursiva añadida] y la redefinición de la soberanía. Una nueva integración regional no puede repetir relaciones de asimetría y subordinación, y por esa razón es indispensable atender a estos nuevos desafíos”. Para reforzar este criterio ofrece otros puntos de vista que pueden perfectamente ser incorporados en varios de los debates presentados aquí, entre ellos el hecho de que “el establecimiento de políticas comunes requiere una nueva actitud entre los gobiernos que permita generar un marco supranacional, un cuerpo normativo acordado por los países miembros y que obliga a cada uno de ellos. Una de las razones de la ausencia de “políticas regionales comunes” es precisamente carecer de un marco supranacional. No se cuenta con estos mecanismos debido a la resistencia de los países, en algunos casos abierta y en otros más silenciosa. Este aspecto central no ha recibido la atención adecuada, tanto desde los sectores convencionales como desde muchos analistas progresistas”. Ante las posiciones resueltamente contrarias a la supranacionalidad como vía para la integración latinoamericana, GUDYNAS propone que esta alternativa debe partir de varias condiciones, entre ellas, la democratización de las estructuras y organismos creados, con la potenciación de la participación ciudadana; el establecimiento de nuevos balances entre *soberanía* y *autonomía*, que permitan redefinir la primera categoría, garantizando a la vez mayores niveles de independencia regional; la generación de nuevos estilos de desarrollo en la región y la formación paulatina de una idea de “ciudadanía regional”, que permita afianzar las bases democráticas de este proceso y al mismo tiempo que “las personas valoren los espacios regionales como caminos potenciales hacia una mejor calidad de vida” (cfr., GUDYNAS, E.: “América Latina. El nuevo debate sobre la integración”, en Tercer Mundo Económico, Vol. I, No. 185, octubre de 2005, pp. 11-13)

<sup>40</sup> Sea cual fuere en definitiva el destino de nuestro proceso integracionista. La supranacionalidad, por ejemplo, no es inversamente proporcional al principio de igualdad soberana de los Estados. Los que alientan la idea de la posibilidad de inmiscuirse en los asuntos internos de un Estado por la naturaleza supranacional de un determinado esquema de integración niegan al mismo tiempo las potencialidades mismas de este proceso de fundarse sobre los pilares de la cooperación, la solidaridad y el respeto mutuo, el intercambio y el

derivan: el respeto a la autodeterminación, la no intervención en los asuntos internos, entre otros, que han sido promovidos y reafirmados en múltiples textos normativos y declaraciones de la Organización de Naciones Unidas y en los propios instrumentos convencionales continentales. Sería arriesgado asumir que la supranacionalidad es la fórmula idónea para nuestro continente, al final del largo camino por su unidad. Lo que es meritorio reconocer es que resulta una vía apropiada para sostener y comprometer jurídicamente a los actores de cualquier proceso de integración continental, haciendo posible su fundamentación desde bases jurídicas, llevándolo hacia los términos de plena integración jurídica.

En la propuesta confederal, al tiempo que se pretende conservar los atributos que se imponen como aparentes obstáculos en la configuración de un esquema supranacional, se convierte en la más viable en las circunstancias actuales, divisándose una posibilidad futura de alcanzar la unión de nuestras naciones, bajo normas e instituciones que por razones lógicas deberán echar manos a los presupuestos conceptuales y prácticos propios del modelo supranacional. Pero para arribar a ese estadio -si en su momento resultare lo más beneficioso para el destino de nuestros pueblos-, queda mucho por hacer, y en materia de fundamentación jurídica de la integración un camino posible pudiese ser la Confederación de Estados, que tiene en la Alternativa Bolivariana para las Américas un escenario adecuado para su implementación, como paso previo en la búsqueda de la completa unidad continental.

#### **4. La fundamentación desde bases jurídicas del proceso de integración regional.**

Con anterioridad se ha introducido el tema de la necesidad de sustentar jurídicamente el proceso de integración continental. Se ha empleado para ello el término *fundamentación desde bases jurídicas* de la integración regional, del cual se plantearán algunos aspectos sobre su alcance, y la motivación de esta propuesta conceptual en el marco de la estructura confederal.

Al hablar de la necesidad de fundamentación desde bases jurídicas del proceso de integración regional se pretende introducir la idea de la construcción de un esquema donde no solo se recurra a estos instrumentos jurídicos en el punto de partida<sup>41</sup> sino donde sea posible crear bases duraderas, afianzadas por el Derecho, de tal suerte que el sentido de la integración sobrepase espacios regionales restringidos y, sobre todo, los aspectos de interés reducidos al campo económico, sumando también lo relativo a la participación de las sociedad civil<sup>42</sup> a la agenda integracionista.

---

equilibrio de un área geográfica específica. Otro tipo de integración pensado para desarrollar oportunismos dejaría de ser tal para convertirse sencillamente en una fórmula de dominación.

<sup>41</sup> Como ha expresado PRADO SIFONTES: “la dimensión jurídica no se circunscribe solamente a los tratados constitutivos, sino a todos los actos jurídicos que se realizan dentro del esquema y de los cuales se derivan las relaciones jurídicas entre los Estados partes de él y también las relaciones entre el Derecho creado dentro del propio esquema con el Derecho interno de cada uno de ellos” (cfr., PRADO SIFONTES, M. E: op. cit.).

<sup>42</sup> La cuestión del protagonismo social en la construcción del proceso de integración ha sido arduamente debatida, y no ha obtenido el mayor respaldo. Para un sector relevante en la doctrina sigue predominando el argumento de que la integración regional debe construirse “desde arriba”, por lo que el peso decisivo en el éxito de este proceso dependerá de las voluntades políticas puestas en escena, encabezadas por los representantes de los Estados, que, a fin de cuentas, siguen siendo los sujetos protagonistas de la integración. El “déficit de legitimación” que, sin embargo, enfrentó el *Tratado por el que se establece una Constitución para Europa*, como se comprobó con algunas cifras de las negativas francesa y holandesa en la consulta

Al inclinarnos por la *fundamentación desde bases jurídicas del proceso de integración* debemos atender primeramente a las fórmulas más correctas de encauzar dicho proceso en nuestra área geográfica, determinando con claridad el papel de las normas de Derecho aplicables a este tipo de relaciones, que sin discusión, parten de la naturaleza internacional de los vínculos de cooperación e intercambio entre los Estados; debe observarse el impacto que jurídicamente puede tener la construcción de uno u otro esquema, sobre todo en el ámbito de las competencias soberanas en los marcos estatales y fuera de ellos, así como la preservación de los principios básicos de Derecho Internacional, que garanticen ante todo el respeto a las individualidades como premisa para la formación de espacios multilaterales; la creación de mecanismos institucionales rectores del proceso de integración, con capacidad para tomar decisiones de alcance general, con valor de normas jurídicas obligatorias y la determinación de los espacios de regulación normativa que atiendan los beneficios recíprocos y permitan compartir las cargas que todo esquema integracionista comporta. De igual manera, presupone la consolidación y perfeccionamiento de las regulaciones específicas de las operaciones comerciales y financieras, esenciales en un proceso de esta naturaleza. Estas bases jurídicas de la integración deben potenciar una unión más sólida, aun cuando la fórmula escogida no haga desaparecer al Estado-nación como categoría. Resulta claro que fundamentar desde la perspectiva jurídica no puede reducirse a estos puntos supramencionados. Como tampoco supone el abandono de la teoría económica, y mucho menos de las concepciones políticas que determinan, en buena medida, el paso decisivo y definitorio.

---

popular celebrada a efectos de su ratificación, ha permitido un ligero desplazamiento de este criterio hacia el reconocimiento del papel legitimador de la sociedad, el cual no puede ser anulado en un proceso cuyas decisiones comportan una importante afectación de los atributos nacionales. No significa esto que se haya asumido esta realidad con carácter absoluto, sobre todo en Europa (incluso se explica la inexistencia de un criterio de “etnicidad europea” -SCHNAPPER-, que atenta lo mismo contra la posibilidad de construir una “gran nación” como de su legitimación. Se sostiene también la llamada *no-demos-thesis*, que en su contenido afecta sensiblemente la realización de una unificación político-jurídica de los Estados en un ente superior. Cfr., *inter alia*, HABERMAS, J.: “¿Por qué la Unión Europea necesita un marco constitucional?”, en HÄBERLE, P; HABERMAS, J.; KOTZUR, M.; FERRAJOLI, L.; ERMANN, V.: op. cit., pp. 45-73. Profunda polémica, además, en torno a la necesidad y viabilidad de un *proceso constituyente* a esta escala, que parece diluirse en los planes “simplificadores” del nuevo Tratado de la Unión Europea y el *Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea*, aprobados en Lisboa, en 2007). A América Latina, en su empeño integracionista, corresponderá evaluar estas posiciones y abrir paso -como va sucediendo paulatinamente en los foros sociales para la integración- a una práctica diferente e inclusiva, donde la sociedad participe directamente no solo de los beneficios, sino de la construcción misma de este proceso. Como señala Thomas FRITZ, “después del fracaso del Tratado Constitucional movimientos progresistas de la Unión Europea están desarrollando modelos de una integración social, con equidad entre los Estados. En este sentido los modelos latinoamericanos pueden también estimular la discusión en Europa”, lo que ratifica nuestra posición ventajosa respecto a crear un esquema diferente y con elementos que sirvan de referentes al resto de los procesos de integración regional. Enfatiza ROJAS ARAVENA en que “la integración latinoamericana es hoy, sin embargo, un proceso que no solo se realiza desde los espacios públicos y estatales. Hay ‘otra’ integración, aquella que se produce y reproduce en los amplios espacios privados en donde reside la sociedad civil. En estos espacios de informalidad también es posible hallar integración y promoverla. De allí la importancia de realizar aproximaciones más inclusivas y plurales, más creativas y heterodoxas, a un tema que por demasiado tiempo fue ámbito exclusivo de ‘lo oficial’” (ROJAS ARAVENA, F. y SOLÍS RIVERA, L. G.: *La integración latinoamericana. Visiones regionales y subregionales*, Juricentro, San José, Costa Rica, 2006, pp. 8-9.).

En nuestro caso son muchos los obstáculos por salvar, que arrancan de nuestras particularidades como continente.

Entre los aspectos que “no colaboran para la integración de la región” se señalan las viejas disputas en el orden territorial que en su momento conllevaran a conflictos armados, desconfianzas y temores de países pequeños frente a sus vecinos más fuertes, la existencia de economías competitivas no complementarias y la presencia de problemas internos que no contribuyen con el equilibrio de determinadas regiones. De la misma manera, constituyen óbices en el logro de la integración continental la posición de determinados grupos elitistas en el poder que asumen y defienden intereses particulares por encima de los regionales, el desinterés cultivado por décadas de estrechar lazos de solidaridad y cooperación en el continente, el desprecio inicial a los aspectos políticos y sociales de la integración, complementado con la carencia de estructuras jurídico-institucionales en el proceso integracionista, la imposición de tendencias centrífugas y la exacerbación del nacionalismo, entre otros, como el afianzamiento de la dependencia respecto a estilos y tendencias foráneas<sup>43</sup>. Estos elementos determinan, en buena medida, la ineficacia de algunos de los mecanismos integracionistas desarrollados en el continente y, fundamentalmente, impiden llevar a su más elevada expresión el propósito de unificación política y jurídica de los Estados latinoamericanos.

La *fundamentación desde bases jurídicas del proceso de integración regional* debe atender, elementalmente, a la necesidad de instrumentación jurídica de las relaciones que en el seno de la integración se producen, permitiendo apoyarse en el Derecho para la construcción misma del esquema apropiado, más ventajoso y viable, de acuerdo a las características particulares de la región, sin que obligatoriamente este modelo presuponga la marcha inmediata hacia la supranacionalidad. Hecho que no significa que se desconozcan los imperativos actuales que operan, cualesquiera sean los esquemas de integración implementados, en el concierto internacional, a decir, las necesarias aperturas que deben hacer los Estados y las progresivas cesiones de competencias soberanas, para hacer efectivo el principio de cooperación y el establecimiento de estructuras comunes a los fines de la conducción y regulación de este proceso.

Relacionado con la necesidad de fundamentación desde bases jurídicas y políticas del proceso integracionista latinoamericano se produjo una propuesta<sup>44</sup> para la constitución de

---

<sup>43</sup> Cfr., CARPIZO, J.: “Derecho Constitucional Latinoamericano y Comparado”, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XXXVIII, No. 114, septiembre-diciembre de 2005, pp. 949-989 y KAPLAN, M.: “Democratización, desarrollo nacional e integración regional de América Latina”, cit., pp. 32 y ss. Estos mismos autores ofrecen, en contraposición, algunos elementos aglutinadores en el proceso de integración en América Latina. CARPIZO parte de los lazos históricos comunes, a los que se suman la herencia cultural, el idioma, la idea de unidad o cohesión, el mestizaje, y especialmente la tradición política y jurídica similar. A estos factores se incorporan otros de “nuevo cuño”, entre ellos, los renovados problemas comunes (la pobreza, la desigualdad social, etc.), la fuerza de la unión, los continuos intentos de flexibilización, complementación, cooperación e integración. Por su parte, el intelectual y economista cubano Osvaldo MARTÍNEZ nos recuerda que “América Latina, aun sin pretender un romántico y falso homologuismo entre sus naciones y pueblos, muestra unas condiciones para la integración que en teoría, son superiores a las de cualquier otra región del planeta”, precisamente por los elementos unificadores que poseen un fuerte cimiento histórico, político y cultural. (cfr., MARTÍNEZ, O.: “ALBA y ALCA: el dilema de la integración o la anexión”, cit.).

<sup>44</sup> Estas declaraciones oficiales fueron realizadas por el Presidente venezolano Hugo Chávez Frías. Una de ellas en el discurso durante la Clausura de la II Cumbre de Presidentes y Jefes de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), el 17 de abril de 1999, celebrada en República Dominicana. Allí expresó: “Insisto en que además de este elemento económico, yo me atrevo a plantear una vieja idea que he oído, he



una Confederación de Estados, cuyas proyecciones podían concretarse en los marcos de Alternativa Bolivariana para las Américas. Esta idea no ha sido, sin embargo, sistematizada, y no aparece en los puntos de la agenda actual sobre los temas de la integración en nuestro continente. No presupone ello que no continúe teniendo validez, por lo que tratarán de brindarse en este epígrafe elementos que respalden este planteamiento, y que tiendan, en definitiva, a evaluar la importancia y viabilidad de su aplicación a los fines de dar un paso de avance en la creación del sustento jurídico y político de la integración regional.

#### **4.1 La perspectiva confederal en el contexto de la integración latinoamericana.**

Si escepticismos levanta la supranacionalidad aplicada al proceso de integración en América Latina, la idea de creación de una Confederación de Estados llega hasta observarse como una proposición rara. La historia latinoamericana cuenta con precedentes importantes en la formación de estructuras confederales. El proyecto de unificación continental buscó refugio en esta alternativa en más de una ocasión. Estuvo presente en las propuestas mirandinas y Bolívar fue defensor de este modelo. A grandes saltos, puede decirse que su constatación práctica puede hallarse en el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua, elaborado y aprobado por la Asamblea Americana del Congreso de Panamá, que sesionó del 22 de junio al 5 de julio de 1826; la Confederación Granadina, compuesta por los Estados de Antioquia, Cundinamarca, Bolívar, Boyacá, Cauca, Magdalena, Panamá y Santander, antes de integrarse en 1861 la Unión Colombiana o la República Centroamericana que desde 1895 hasta 1898 revistió la forma de una Confederación, formada por Honduras, Nicaragua y El Salvador, por solo citar algunos ejemplos. Pero como no se trata aquí de desarrollar toda una explicación histórica y teórica de esta institución<sup>45</sup>, que bien puede encontrarse en los textos de Historia Universal, antigua y

---

*discutido desde México hasta Argentina, es la idea de que marchemos hacia una Confederación de Estados Latinoamericanos y Caribeños*". En otro espacio -Acto de la firma del Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas, realizado el 19 de octubre de 1999- afirmó: *"Nosotros desde Caracas seguimos y seguiremos impulsando la idea bolivariana de lograr la integración política de nuestros Estados y nuestras Repúblicas. Una Confederación de Estados de América Latina y del Caribe, ¿por qué no? ¿Por qué no hacemos un plan para una década? No tenemos un plan de mediano plazo, imperativo es que hagamos un plan..."*. (Notas tomadas en VASCÓS GONZÁLEZ, F.: "Constitución de una Confederación de Estados Latinoamericanos", ponencia presentada en el IV Encuentro Internacional "Constitución, Democracia y Sistemas Políticos", Unión Nacional de Juristas de Cuba, La Habana, 22 de marzo de 2007, en CD del evento.)

<sup>45</sup> De cuyo análisis histórico y teórico aparecen múltiples obras y artículos tanto desde las ciencias políticas y constitucionales, las históricas propiamente dichas como del Derecho Internacional Público. Entre otras fuentes pueden consultarse: BLUNTSCHLI, J. G.: Derecho Público Universal, Tomo I, Nueva Biblioteca Universal (Sección Jurídica), Centro Editorial de Góngora, Madrid; DE BLAS GUERRERO, A. y GARCÍA COTARELO, R.: Teoría del Estado y Sistemas Políticos, Tomo I; D' ESTÉFANO PISANI, M. A: Breve historia del Derecho Internacional: desde la Antigüedad hasta el año 2002, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2003 y Esquemas del Derecho Internacional Público, Tomo I, Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1980; FERNÁNDEZ BULTÉ, J.: Teoría del Estado y del Derecho, Tomo I, Editorial Félix Varela, La Habana, 2005; FISCHBACH, O. G.: Teoría General del Estado, Segunda Edición, Editorial Labor S. A, Barcelona-Buenos Aires, 1929; GÓMEZ SÁNCHEZ, Y. et al: Lecciones de Derecho Político I, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 1999; JELLINEK, G.: Teoría General del Estado, Editorial Albatros, Buenos Aires, 1943; KOROVIN, Y. et al: Derecho Internacional Público, Editorial Grijalbo, S. A, México D.F., 1963; LEGÓN, F.: Tratado de Derecho Político General, Tomo II (Estructura y funciones en la Teoría del Estado), Ediar S. A. Editores, Buenos Aires, 1961; PODESTA COSTA, L. A y RUDA, J. Ma.: Derecho Internacional Público, Tomo 1, Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires, 1988; ROS, C. B.:

medieval, y fundamentalmente en los tratados sobre Derecho Político o Constitucional, la propia Ciencia Política, la Teoría del Estado e incluso el Derecho Internacional Público, me limitaré a exponer algunos elementos que considero relevantes<sup>46</sup>.

La Confederación de Estados posee la capacidad, como modelo político-jurídico, de preservar atributos tan fielmente defendidos por los latinoamericanos, como la soberanía. Garantiza primeramente el sustento jurídico del esquema, puesto que nace como producto de un pacto de naturaleza internacional, de un instrumento convencional. Permite la conformación de una Asamblea o Conferencia como órgano permanente donde asisten representantes de los Estados confederados, se discuten y adoptan las principales líneas estratégicas que sirven de finalidad a este modelo, y se desarrolla la idea de una representación como entidad a los fines determinados por sus miembros, que históricamente han sido de defensa exterior, económicos, comerciales y políticos. Es una estructura política, pero con nexos jurídicos, donde si bien sus normas no poseen el carácter y la fuerza de una norma de Derecho interno o supranacional, sí contribuyen a la unificación de la voluntad de los Estados miembros, representándola y por ende obligándolos a observar las reglas y disposiciones emanadas de este tipo de esquema internacional<sup>47</sup>. Reserva además a sus miembros los derechos de *nulificación*, en virtud del cual estos ejercitan “la facultad de analizar y declarar la nulidad de las leyes que rigen la Confederación, cuando entiendan que ellas afectan su propia soberanía”, y el de *secesión*, por el que “cualquiera de los Estados componentes puede siempre separarse de la Confederación”.<sup>48</sup>

---

Derecho Político, Tomo I, Editorial Sanná, Buenos Aires, 1942; RUBIO NÚÑEZ, R.: cit. ; SERCQ, M.: “Estado federal y Confederación de Estados”, <http://foster.20megsfree.com/confederacin.htm>; TAIBO, C.: “¿Estado confederal o confederación de Estados?”, <http://campusvirtual.uma.es/rdmunhoz/docencia/dctos/dctos2/Taibo.htm>; TORRES DEL MORAL, A. et al: Introducción al Derecho Político. Unidades Didácticas, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 1997 e Introducción al Derecho Constitucional, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, 1996; TUNKIN, G.: Curso de Derecho Internacional. Manual, Libros 1 y 2, Editorial Progreso, Moscú, 1979; VASCÓS GONZÁLEZ, F.: “La integración política latinoamericana”, cit.; “Constitución de una Confederación de Estados Latinoamericanos”, cit. y “Alternativa Bolivariana para las Américas: hacia una Confederación de Estados”, cit., *et al.*

<sup>46</sup> Algunas referencias sobre estas problemáticas que pertenecen a la historia continental, pero que también interesan a Derecho Internacional Público, pueden obtenerse en textos como los que siguen: D’ ESTÉFANO PISANI, M. A.: Esquemas del Derecho Internacional Público, Tomo I, op. cit, pp. 207-208; BOHÓRQUEZ MORÁN, C. L.: Francisco de Miranda. Precursor de las independencias de la América Latina, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2003; PIVIDAL, F., Bolívar: Pensamiento precursor del antimperialismo, Fondo Cultural del ALBA, La Habana, 2006; de GUERRA VILABOY, S.: Breve historia de América Latina, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2006 y El dilema de la independencia, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2007; además: GUERRA VILABOY, S. y MALDONADO GALLARDO, A.: “Raíces históricas de la integración latinoamericana”, en Historia y perspectiva de la integración latinoamericana, AUNA, México, 2000, pp. 31-84; BENÍTEZ, J. A.: Bolívar y Martí en la integración de América Latina, Editorial Pablo de la Torriente, La Habana, 2002; ANDRADE TERÁN, R.: El mito de la unidad continental, Imprenta Deptal del Valle, Cali, 1990; y sitios electrónicos como: <http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=8> <http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=7> <http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=6&page=3>, entre otros.

<sup>47</sup> FISCHBACH observa que “como toda asociación, la Confederación de Estados debe ejercer sobre sus miembros una especie de poder coactivo”, aunque este no sea precisamente un poder de naturaleza estatal; *cfr.*: FISCHBACH, O. G., Teoría General del Estado, op. cit.

<sup>48</sup> En ambos casos citas de ROS, C., Derecho Político, Tomo I, op.cit., pp. 131 y 132.

Estos elementos permiten validar la idea de proponer la creación de este esquema como paso de avance en la fundamentación desde bases jurídicas de la integración continental, sin que ello equivalga a decir que será un modelo perpetuo e insuperable.

Los propios arquitectos de la integración europea manejaron en algún momento la idea confederal y aún circulan interesantes y valiosos ensayos donde se alude a la perspectiva confederal en alguna etapa de la historia comunitaria.

Si de lo que se trata es de preservar los contenidos de la soberanía estatal, hasta estar más preparados para sacrificar algunos en aras de la consolidación del proceso de integración, esta es la fórmula que mejor cuida de estos intereses. Si el temor es sobre los nacionalismos, la propuesta confederal incluye normas que van a sus Estados miembros, no a sus ciudadanos directamente. En todo caso habrá que echar mano a los mecanismos de incorporación de los tratados internacionales a los ordenamientos jurídicos internos, para que surtan efectos las decisiones de la Confederación en el plano interno, así como no habrá ciudadanos “comunes”, o como se expresaba a la vieja usanza “súbditos” de esta unión.

Como alianza estratégica es fundamental. Y no se hace referencia a simples alianzas sino a las que fundamentadas en una voluntad política y sustentada en un marco jurídico adecuado, nos permita enfrentar las amenazas tanto militares como económicas provenientes de cualquier parte. Es un mecanismo preventivo, disuasivo, superador de crisis y amenazas.

Puede entonces que su existencia no pase de ser temporal, allanando el camino a fórmulas superiores de integración jurídica, pero creo que constituye un esquema válido, viable en las condiciones de América Latina y necesario a la luz de las deudas con la fundamentación jurídica del proceso integracionista que persisten en nuestro contexto.

## **5. A modo de conclusión.**

El intentar esbozar algunas ideas que de alguna manera se acercaran más a los retos desde el Derecho para con el proceso de integración regional, ha constituido una especie de experiencia reveladora. Respeto la multiplicidad de criterios que en torno a esta temática se sostienen, pero también invito a pensar en la importancia que representa el hecho de que sean escuchadas y analizadas todas las propuestas que en el contexto latinoamericano actual emerjan como posibles soluciones a la necesidad de extender el proceso de integración regional a nuevos y fortalecidos esquemas, con la garantía de un sólido fundamento jurídico. También debe pensarse en que las propias realidades por las que atravesamos, las circunstancias hoy planteadas, demuestran cada vez más que van quedando muy pocos caminos fuera del que nos conduce a integrarnos plenamente, para sortear las graves crisis y amenazas que se ciernen sobre nuestros pueblos. Concluyo con algunas ideas que estimo esenciales en este artículo:

- I. La realidad de la fragmentación o subregionalización que afectan el proceso de integración de América Latina, lo que obstaculiza por el momento la construcción de un proyecto definitivo para alcanzar la unidad continental.
- II. La necesidad de fundamentación desde bases jurídicas del proceso de integración regional a partir de la formación de un esquema afianzado en instrumentos jurídicos que permitan vincular más efectivamente a los Estados de la región, superador de la perspectiva económica, para incorporar otras áreas de la cooperación y el intercambio solidario.
- III. El necesario análisis de otros procesos de integración, como el europeo, para arribar a la convicción de que solo a través de un marco jurídico que no solo vincule sino que además

tienda a asegurar algunos elementos relevantes de sus Estados miembros puede pensarse realmente en una integración continental consolidada, lo que no equivale a decir que sea obligatoria la reproducción de estos esquemas.

- IV. La importancia de atender algunos puntos que sustentan la tesis de la fundamentación desde bases jurídicas del proceso de integración regional, entre ellos, la determinación de las fórmulas más correctas para encauzar dicho proceso; el papel del Derecho y las normas aplicables a este tipo de relaciones; el impacto jurídico sobre las categorías fundamentales del Estado, como la soberanía, y su proyección sobre los principios de Derecho Internacional; la creación de una institucionalidad propia para el esquema adoptado; y la consolidación y perfeccionamiento de las regulaciones normativas específicas para el resto de las relaciones que con carácter multifacético se desarrollen.
- V. El hecho confirmado de la tendencia marcadamente económica de los proyectos integracionistas desarrollados en el continente, lo que condiciona disten regularmente de ofrecer una solución a la configuración jurídica de la integración continental, más allá de estos espacios subregionales, distinguiendo los aportes y perspectivas de esquemas como MERCOSUR y la recientemente creada Unión de Naciones del Sur, válidos a la hora de exponer el modelo definitivo de integración en América Latina.
- VI. La formulación de dos vías fundamentales para sustentar jurídicamente la integración regional: la supranacionalidad y el modelo confederal, debatiéndose en torno a su eficacia toda vez que subsisten reservas derivadas del cauteloso tratamiento de la soberanía estatal y los nacionalismos en Latinoamérica.
- VII. Las posibilidades de conformar un esquema de mayor sencillez y operabilidad que sea consecuente con nuestras realidades y potencialidades, basado en la idea de la Confederación de Estados como esquema viable en las condiciones de América Latina, o al menos preliminarmente en los marcos de la Alternativa Bolivariana para las Américas, para asegurar la fundamentación jurídica del proceso de integración y allanar el camino hacia formas superiores de integración jurídica en el continente.

## Bibliografía

1. ACOSTA ESTÉVEZ, J. B.: “La interdependencia entre el Derecho Internacional y el Derecho Comunitario europeo”, en *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, Vol. V, 2005, pp. 13-50.
2. ALBA ECONOMÍA (Revista de Economía Política) “ALBA. El camino de la nueva integración”, Año 1, No. 1, octubre-noviembre 2007, BANCOEX, Venezuela, pp. 47-48.
3. ALZUGARAY, C. et al: La integración política latinoamericana y caribeña: un proyecto comunitario para el siglo XXI, AUNA, México, 2001.
4. ANDRADE TERÁN, R.: El mito de la unidad continental, Imprenta Deptal del Valle, Cali, 1990.
5. BECERRA RAMÍREZ, M.: Derecho Internacional Público, Biblioteca Jurídica Virtual de la UNAM, IIJ-UNAM, México, D. F., 2007.
6. BENÍTEZ, J. A.: Bolívar y Martí en la integración de América Latina, Editorial Pablo de la Torriente, La Habana, 2002.
7. BLUNTSCHLI, J. G.: Derecho Público Universal, Tomo I, Nueva Biblioteca Universal (Sección Jurídica), Centro Editorial de Góngora, Madrid.
8. BOHÓRQUEZ MORÁN, C. L.: Francisco de Miranda. Precursor de las independencias de la América Latina, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2003.
9. CARPIZO, J.: “Derecho Constitucional Latinoamericano y Comparado”, en *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, nueva serie, año XXXVIII, No. 114, septiembre-diciembre de 2005, pp. 949-989.
10. CARPIZO, J.: “Globalización y los principios de soberanía, autodeterminación y no intervención”, en *Anuario Mexicano de Derecho Constitucional*, Vol. IV, 2004, pp. 117-148.
11. CARRILLO SALCEDO, J. A.: Curso de Derecho Internacional Público. Introducción a su estructura, dinámica y funciones, Editorial Tecnos S. A, 1ra. Edición, 2da. Reimpresión, Madrid, 1994.
12. D’ ESTÉFANO PISANI, M. A: Breve historia del Derecho Internacional: desde la Antigüedad hasta el año 2002, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2003.
13. D’ ESTÉFANO PISANI, M. A: Esquemas del Derecho Internacional Público, Tomo I, Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1980.
14. DE BLAS GUERRERO, A. y GARCÍA COTARELO, R.: Teoría del Estado y Sistemas Políticos, Tomo I.
15. DE CASTRO SÁNCHEZ, C.: “De la cooperación política europea a la Política Exterior y de Seguridad Común”, en *Boletín de la Facultad de Derecho*, No. 15, Segunda Época, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 2000, pp. 237-268.
16. DE CASTRO SÁNCHEZ, C.: Las acciones armadas por razones humanitarias ¿hacia una injerencia humanitaria? Una aproximación teórico-práctica, Tesis doctoral, Ediciones del Ministerio de Defensa, Madrid, 2005.
17. DE LA CRUZ, R.: Tratado de Libre Comercio de la América del Norte (TLCAN). La experiencia de México, BANCOMEXT, Guatemala, 2005.
18. DÍAZ BARRADO, C. M.: “La Comunidad Suramericana de Naciones: Propuestas y Realizaciones”, en *Revista Española de Derecho Internacional*, Vol. LVII-2005, No. 2, julio-diciembre, Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales-Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2006, pp. 641-662.

19. DÍAZ BARRADO, C. M.: “Protocolo de Olivos para la solución de controversias en MERCOSUR adoptado el 18 de febrero de 2002: un paso adelante en la integración mercosureña”, en Revista Española de Derecho Internacional, Vol. LV-2003, No. 2, julio-diciembre, Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales-Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2004, pp. 1097-1102.
20. DIETERICH, H.: “Integración latinoamericana antes que ALCA”, en La página de Dieterich: <http://www.rebellion.org>, [consulta: noviembre de 2007].
21. DIEZ DE VELASCO, M.: Instituciones de Derecho Internacional Público, 15ta. Edición, Editorial Tecnos, Madrid, 2005.
22. DUEÑAS MUÑOZ, J. C.: “Soberanía y Estado constitucional: su importancia en la integración y en el derecho comunitario”, en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, 2007, pp. 741-760.
23. FERNÁNDEZ BULTÉ, J.: Teoría del Estado y del Derecho, Tomo I, Editorial Félix Varela, La Habana, 2005.
24. FERRERO COSTA, E.: “La integración en América Latina: situación actual y perspectivas”, en MOLS/ HENGSTENBERG/ KOHUT/ LAUTH/ SANDNER/ SANGMEISTERS (Editores): Cambio de paradigmas en América Latina: nuevos impulsos, nuevos temores, ADLAF, Fundación Friedrich Ebert, Editorial Nueva Sociedad, Caracas, 1994, pp. 131-139.
25. FISCHBACH, O. G.: Teoría General del Estado, Segunda Edición, Editorial Labor S. A, Barcelona-Buenos Aires, 1929.
26. FRITZ, Th.: ALBA contra ALCA. La Alternativa Bolivariana para las Américas: una nueva vía para la integración regional en Latinoamérica, Centro de Investigación y Documentación Chile-Latinoamérica, Berlín, 2007 (disponible en INTERNET).
27. GÓMEZ SÁNCHEZ, Y. et al: Lecciones de Derecho Político I, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 1999
28. GONZÁLEZ ENCINAR, J. J.: Derecho Constitucional. España y Unión Europea, 4ta. Edición, Códigos Ariel, 2002.
29. GUDYNAS, E.: “América Latina. El nuevo debate sobre la integración”, en Tercer Mundo Económico, Vol. I, No. 185, octubre de 2005, pp. 11-13.
30. GUERRA VILABOY, S. y MALDONADO GALLARDO, A.: “Raíces históricas de la integración latinoamericana”, en Historia y perspectiva de la integración latinoamericana, AUNA, México, 2000, pp. 31-84.
31. GUERRA VILABOY, S.: “Antecedentes históricos de la Alternativa Bolivariana para las Américas”, en Contexto Latinoamericano. Revista de Análisis Político, No. 1 septiembre-diciembre, Editorial Ocean Sur, Bogotá, 2006, pp. 149-162.
32. GUERRA VILABOY, S.: Breve historia de América Latina, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2006 y El dilema de la independencia, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2007.
33. GUERRA VILABOY, S.: El dilema de la independencia, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2007.
34. GUEVARA RAMÍREZ, L.: “Aspectos jurídicos de la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA”, texto de la intervención en la Cumbre Social de los Pueblos de Cochabamba, documento electrónico, Biblioteca Francisco Varona Duque de Estrada, Unión Nacional de Juristas de Cuba [consulta: junio de 2008].



35. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, I.: “El referéndum sobre la Constitución para Europa”, [http://INTEGRACION\\_politica\UE\referendo\\_constit\\_UE.mht](http://INTEGRACION_politica\UE\referendo_constit_UE.mht) [consulta: noviembre de 2007].
36. HÄBERLE, P. y KOTZUR, M.: De la soberanía al Derecho Constitucional Común: palabras clave para un diálogo europeo-latinoamericano, Biblioteca Jurídica Virtual de la UNAM, IIJ-UNAM, México, D. F., 2006.
37. HÄBERLE, P; HABERMAS, J.; KOTZUR, M.; FERRAJOLI, L.; ERMANN, V.: La constitucionalización de Europa, Biblioteca Jurídica Virtual de la UNAM, IIJ-UNAM, México, D. F., 2008.
38. HERDEGEN, M.: Derecho Internacional Público, Biblioteca Jurídica Virtual de la UNAM, IIJ-UNAM, México, D. F., 2007.
39. HINOJOSA MARTÍNEZ, L. M.: “Globalización y soberanía de los Estados”, Revista Electrónica de Estudios Internacionales, 2005, pp. 1-14, ([www.reei.org](http://www.reei.org)).
40. JELLINEK, G.: Teoría General del Estado, Editorial Albatros, Buenos Aires, 1943.
41. KAPLAN, M.: Democratización, desarrollo nacional e integración regional de América Latina, Biblioteca Jurídica Virtual de la UNAM, IIJ-UNAM, México, D. F., 2008.
42. KAPLAN, M.: Estado y Globalización, Serie Doctrina Jurídica Núm. 90, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F, 2002.
43. KOROVIN, Y. et al: Derecho Internacional Público, Editorial Grijalbo, S. A, México D.F., 1963.
44. KUNZ: “International Law by Analogy”, en American Journal of International Law, Vol. 45, 1951.
45. LA PERGOLA, A.: Los nuevos senderos del federalismo, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1994.
46. LEGÓN, F.: Tratado de Derecho Político General, Tomo II (Estructura y funciones en la Teoría del Estado), Ediar S. A. Editores, Buenos Aires, 1961.
47. LÓPEZ BASAGUREN, A.: “¿Réquiem por la Constitución? El ordenamiento constitucional en la integración comunitaria”, en Civitas Europa. Revista Jurídica sobre la evolución de la Nación y el Estado en Europa. No. 2, marzo, Presses Universitaires de Nancy, 1999, pp. 7-30.
48. LÓPEZ PORTA, M. B.: “El Estado en los procesos de integración y descentralización política. Una reflexión sobre su naturaleza política y jurídica”, en Revista de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, RDUNED, No. 2, 2007, pp. 283-324.
49. MALAMUD, A. y SCHMITTER, P.: “La experiencia de integración europea y el potencial de integración del MERCOSUR”, en Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales, Vol. 46, No. 181, Buenos Aires, abril-junio 2006, pp. 3-31.
50. MANGAS MARTÍN, A. (ed.): Tratado de la Unión Europea, Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y otros actos básicos de Derecho Comunitario, 9na. Edición actualizada, Editorial Tecnos, Madrid, 2001.
51. MARTÍNEZ, O.: “ALBA y ALCA: el dilema de la integración o la anexión”, documento electrónico, Biblioteca Francisco Varona Duque de Estrada, Unión Nacional de Juristas de Cuba [consulta: junio de 2008].
52. MATALA-TALA, L.: “La construction politique européenne: plaidoyer pour un nouveau contrat social”, en Civitas Europa. Revista Jurídica sobre la evolución de la Nación y el Estado en Europa. No. 1, septiembre, Presses Universitaires de Nancy, 1998, pp. 109-124.
53. MORENO DURAZO, L. C.: “Soberanía nacional, globalización y regionalización”, en El papel del Derecho Internacional en América. La soberanía nacional en la era de la

- integración regional, Biblioteca Jurídica Virtual de la UNAM, IIJ-UNAM, México, D. F., 2008, pp. 263-272.
54. OROPEZA GARCÍA, A. (coord.): ALCA, un debate sobre la integración, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Centro Argentino para las Relaciones Internacionales, México, 2003.
  55. PASTOR RIDRUEJO, J. A.: Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales, 4ta. Edición, Editorial Tecnos S. A., Madrid, 1992.
  56. PÉREZ CALVO, A.: “La dimensión comunitaria del Estado en Europa occidental”, en Civitas Europa. Revista Jurídica sobre la evolución de la Nación y el Estado en Europa. No. 1, septiembre, Presses Universitaires de Nancy, 1998, pp. 19-34.
  57. PÉREZ CARRILLO, E.: “El Tratado de Niza. Entre la consolidación de la Unión Europea de Maastricht y el debate sobre el futuro de Europa”, en Anuario Mexicano de Derecho Internacional, Vol. II, 2002, pp. 305-334.
  58. PÉREZ CARRILLO, E.: “Unificación y cohesión del continente europeo. Principales instrumentos económicos y jurídicos para la ampliación al este”, en Anuario Mexicano de Derecho Internacional, Vol. III, 2003, pp. 301-327.
  59. PIERRE-CAPS, S.: “L’Union européenne, demos et legitimé: de l’Etat-nation á la Multination”, en Civitas Europa. Revista Jurídica sobre la evolución de la Nación y el Estado en Europa. No. 1, septiembre, Presses Universitaires de Nancy, 1998, pp. 35-54.
  60. PINO CANALES, C. et al: Temas de Derecho Internacional Público, Editorial Félix Varela, La Habana, 2006.
  61. PIVIDAL, F.: Bolívar: Pensamiento precursor del antimperialismo, Fondo Cultural del ALBA, La Habana, 2006.
  62. PODESTA COSTA, L. A y RUDA, J. Ma.: Derecho Internacional Público, Tomo 1, Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires, 1988.
  63. PRADO SIFONTES, M. E.: “El Derecho y su incidencia en el proceso de integración”, en Revista Cubana de Derecho, No. 31, junio de 2008.
  64. ROJAS ARAVENA, F. y SOLÍS RIVERA, L. G.: La integración latinoamericana. Visiones regionales y subregionales, Juricentro, San José, Costa Rica, 2006.
  65. ROS, C. B.: Derecho Político, Tomo I, Editorial Sanná, Buenos Aires, 1942.
  66. ROSELL, M.: Marco institucional y seguridad jurídica en la Comunidad Andina, Secretaría General de la Comunidad Andina, abril de 1999 (disponible en INTERNET).
  67. RUBIO NÚÑEZ, R.: “El proyecto de una Constitución para Europa. Confederación de Estados, Unión de Ciudadanos”, en Nueva revista de política, cultura y arte, No. 88, Madrid, 2003, pp.2-12.
  68. SÁENZ DE SANTAMARÍA, P. A. et al: Introducción al Derecho de la Unión Europea, Editorial Eurolex, Madrid, S. L, 1996.
  69. SALGADO PEÑAHERRERA, G.: El Grupo Andino de hoy: eslabón hacia la integración de Sudamérica, Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador, 1995.
  70. SANAHUJA, J. A.: “Regionalismo e integración en América Latina: balance y perspectivas”, en Revista Pensamiento Iberoamericano (disponible en INTERNET).
  71. SERCQ, M.: “Estado federal y Confederación de Estados”, <http://foster.20megsfree.com/confederacin.htm>.
  72. SOTILLO LORENZO, J. A.: “La Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA): un nuevo espacio de la integración latinoamericana con dimensión social”, Social Watch, 2007 (disponible en INTERNET).

73. TAIBO, C.: “¿Estado confederal o confederación de Estados?”, <http://campusvirtual.uma.es/rdmunhoz/docencia/dctos/dctos2/Taibo.htm>.
74. TORRES DEL MORAL, A. et al: Introducción al Derecho Político. Unidades Didácticas, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 1997.
75. TORRES DEL MORAL, A.: Introducción al Derecho Constitucional, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, 1996; TUNKIN, G.: Curso de Derecho Internacional. Manual, Libros 1 y 2, Editorial Progreso, Moscú, 1979.
76. TORRES ESPINOSA, E.: “El Estado-nación y la Unión Europea. ¿Hacia una necesaria reformulación de lo estatal?”, en Anuario Mexicano de Derecho Internacional, Vol. VI, 2006, pp. 551-575.
77. TORRES ESPINOSA, E.: “Integración europea y globalización. Una perspectiva institucional”, en Anuario Mexicano de Derecho Internacional, Vol. V, 2005, pp. 499-519.
78. VASCÓS GONZÁLEZ, F.: “La integración política latinoamericana”, Política Internacional: <http://www.rebellion.org>.
79. VASCÓS GONZÁLEZ, F.: “Alternativa Bolivariana para las Américas: hacia una Confederación de Estados”, en *Granma*, viernes 15 de junio de 2007.
80. VÁZQUEZ, A. R.: “Soberanía, supranacionalidad e integración: la cuestión en los países del Mercosur”, en Anuario Mexicano de Derecho Constitucional, 2007, pp. 233-244.
81. VENTURA, D.: Las asimetrías entre el Mercosur y la Unión Europea. Los desafíos de una integración interregional, Biblioteca Jurídica Virtual de la UNAM, IIJ-UNAM, México, D. F., 2008.
82. VIDAL PRADO, C.: “El impacto del nuevo Derecho europeo en los tribunales constitucionales”, Editorial COLEX, Madrid, 2004.
83. VIDAL PRADO, C.: “La compatibilidad del Tratado Constitucional Europeo con la Constitución española”, en Persona y Derecho. Revista de fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos, Vol. 55, II, Servicio de Publicaciones Universidad de Navarra, 2006, pp. 999-1055.
84. WITKER, J.: “Las negociaciones del ALCA en Puebla, México. Algunas reflexiones jurídicas”, en Anuario Mexicano de Derecho Internacional, Vol. V, 2005, pp. 521-540.
85. ZELADA CASTEDO, A.: Derecho de la Integración Económica Regional, BID-INTAL, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1989.